



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP

Estudio Nacional:

► Impulsando la Productividad en Bolivia



ESTUDIO NACIONAL:

Impulsando la Productividad

EN BOLIVIA



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP

Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2023

Primera edición 2023

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo están protegidas por derechos de autor en virtud del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, se pueden reproducir extractos breves de ellos sin autorización, siempre y cuando se indique la fuente. Para derechos de reproducción o traducción, la solicitud debe dirigirse a ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico: rights@ilo.org. La Oficina Internacional del Trabajo acoge favorablemente dichas solicitudes.

Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados en una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de conformidad con las licencias que se les otorgan para este fin. Visite www.ifrro.org para hallar la organización de derechos de reproducción de su país.

Estudio Nacional: Impulsando la Productividad en Bolivia. Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP), 2023. 62 pp.

ISBN: 9789220397824 (versión impresa)

ISBN: 9789220397831 (versión web PDF)

Datos de catalogación de la OIT

Productividad, creación de empleo, crecimiento económico, organizaciones empresariales y de empleadores, trabajo decente, desarrollo sostenible.

Las designaciones empleadas en las publicaciones de la OIT, que se encuentran de conformidad con la práctica de las Naciones Unidas, y el material presentado en ellas no implican la expresión de ninguna opinión de la Oficina Internacional del Trabajo sobre el estado legal de ningún país, área o territorio o sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en artículos, estudios y otras contribuciones firmadas corresponde exclusivamente a sus autores, y su publicación no constituye un respaldo de la Oficina Internacional del Trabajo a las opiniones expresadas en ellos. Las referencias a nombres de empresas y productos y procesos comerciales no implican respaldo a estos por parte de la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de no mencionar una empresa, producto o proceso comercial en particular no indica desaprobación.

Puede encontrar información sobre publicaciones de la OIT y productos digitales en: www.ilo.org/publns.

Diseño, maquetación y concepto editorial: Ana Periche Acosta

ADVERTENCIA

El uso del lenguaje que no discrimine, ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español *o/a* para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.

Índice



Resumen ejecutivo	1
Capítulo 1: La productividad en Bolivia	4
Figura 1.1 Crecimiento de la productividad total de los factores	5
Figura 1.2 Contribución de los factores al crecimiento	5
Figura 1.3 Productividad laboral por trabajador	7
Figura 1.4 Productividad laboral por hora trabajada	7
Figura 1.5 PIB per cápita	8
Capítulo 2: Entorno empresarial propicio para la productividad	9
2.1. Estabilidad macroeconómica	9
Figura 2.1.1 Evolución del PIB	10
Figura 2.1.2 Inflación anual IPC	11
Figura 2.1.3 Inflación subyacente	11
Figura 2.1.4 Deuda pública bruta	12
Figura 2.1.5 Servicio de la deuda externa garantizada	12
2.2. Desarrollo de habilidades y calidad educativa	13
Figura 2.2.1 Años de escolaridad promedio	13
Figura 2.2.2 Porcentaje de estudiantes según nivel de pruebas ERCE	14
Figura 2.2.3 Comparativo entre participación laboral total (PL) y educación avanzada (PLEA)	15
Figura 2.2.4 <i>Ranking</i> de habilidades	16
2.3. Mercados laborales inclusivos y flexibles	16
Figura 2.3.1 Tasa de ocupación	16
Figura 2.3.2 Proporción de mujeres en posiciones de gerencia	17
Figura 2.3.3 Desempleo total y proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan	18
Figura 2.3.4 Subempleo	19
2.4. Transición para salir de la informalidad	19

Figura 2.4.1	Proporción de trabajo informal a empleo total	20
Figura 2.4.2	Proporción de trabajo informal a empleo total por sexo	21
Figura 2.4.3	Proporción de trabajo informal a empleo total por edad	21
Figura 2.4.4	Proporción de trabajo informal a empleo total por zona rural/urbana	21
Figura 2.4.5	Proporción de trabajo informal a empleo total por nivel de educación	21
2.5. Emprendimiento e innovación		21
Figura 2.5.1	Indicadores de emprendimiento	22
Figura 2.5.2	Inversión en investigación y desarrollo (I+D)	23
Figura 2.5.3	Índice de preparación para la tecnología de punta	25
2.6. Acceso al crédito y a servicios financieros		25
Figura 2.6.1	Cuenta en institución financiera	26
Figura 2.6.2	Solicitantes de préstamos	27
Figura 2.6.3	Crecimiento de la cartera de crédito	27
Figura 2.6.4	Tasa de interés activa	28
Figura 2.6.5	Diferencia entre tasas activa y pasiva	28
2.7. Infraestructura física y digital, y conectividad con mercados internacionales		29
Figura 2.7.1	Percepción de la calidad de la infraestructura y suministro eléctrico	30
Figura 2.7.2	Suscripciones a banda ancha fija	31
Figura 2.7.3	Índice de penetración de las exportaciones	33
Figura 2.7.4	Índice de concentración de mercado HHI	33
2.8. Derecho de propiedad y Estado de derecho		34
Figura 2.8.1	Índice de derecho de propiedad	36
Figura 2.8.2	Percepción del Estado de derecho y de la calidad regulatoria	36
2.9. Gobernanza y política anticorrupción		37
Figura 2.9.1	Índice de percepción de la corrupción	37
Figura 2.9.2	Percepción del control de la corrupción	38
Capítulo 3: Impulsando la productividad en Bolivia		39
Referencias bibliográficas		45

Prefacio



El bajo crecimiento de la productividad en los países de América Latina y el Caribe explica, en parte, el escaso desarrollo productivo y económico de la región, lo que a su vez afecta en forma negativa la creación de trabajo decente y la calidad de vida de millones de personas. Por estos motivos, los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideran prioritario mejorar la productividad como forma de promover un mayor desarrollo social y económico de la región. En su 341ª reunión en marzo de 2021, el Consejo de Administración de la OIT analizó el documento [El trabajo decente y la productividad](#), que destaca la necesidad de abordar, desde una perspectiva sistémica, los diversos factores que inciden en el aumento de la productividad y su efecto catalizador sobre la creación de trabajo decente, el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida.

En 2022, la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe publicó el *Informe Regional: Transición digital, cambio tecnológico y políticas de desarrollo productivo en ALC: desafíos y oportunidades*, que se aproxima al tema desde múltiples aristas y muestra cómo la productividad de la región ha venido cayendo con respecto a la del resto del mundo, incluso en comparación con otras zonas de países emergentes. De acuerdo con el Informe, los datos muestran que existe una enorme heterogeneidad en el nivel de la productividad entre países, así como entre empresas de diferente tamaño y pertenecientes a distintos sectores de actividad. En sus conclusiones, el Informe ofrece una serie de recomendaciones generales que toman en cuenta estos elementos y que sirvieron de estímulo para emprender la presente investigación.

Además, la publicación del Informe Regional en 2022 motivó a los mandantes de la OIT a solicitar el análisis de la situación específica de los países del continente. Por esa razón, en 2023 la Oficina Regional de la OIT inició la elaboración de nueve estudios nacionales con el fin de conocer los factores que más impactan en la productividad, para ofrecer una base empírica sobre la cual puedan presentarse recomendaciones para mejorar la situación al respecto. Si bien la baja productividad es un problema regional, las soluciones deben generarse a nivel nacional mediante la aplicación de políticas públicas consistentes.

Los nueve estudios nacionales realizados hasta el presente analizan factores claves que impactan en la productividad de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Uruguay, evaluando la situación a través de nueve dimensiones específicas para generar un entorno propicio que ayude a mejorarla¹. Ellas son la estabilidad macroeconómica; el desarrollo de habilidades y calidad educativa; la existencia de mercados laborales inclusivos y flexibles; la transición de la informalidad a la formalidad; la capacidad de promover el emprendimiento y la innovación; el acceso al crédito y a servicios financieros; la infraestructura física y digital; la vinculación con mercados internacionales; el respeto al derecho de propiedad y la vigencia del Estado de derecho; y buenas prácticas de gobernanza y políticas anticorrupción.

Mediante la revisión de indicadores esenciales de la productividad y las dimensiones antes mencionadas, se presenta una trayectoria de la productividad de cada país analizado, tanto en el tiempo como en relación con otros países. Como resultado del análisis, se identifican áreas de oportunidad que deberían

¹ Estas dimensiones fueron inicialmente identificadas en el documento [Impulsando la productividad: una guía para organizaciones empresariales](#) publicado por la Oficina de Actividades con Empleadores de la OIT (ACT/EMP) en noviembre de 2020.

ser revisadas con mayor detenimiento por parte de los gobiernos y los actores sociales, para generar recomendaciones de acciones prácticas, políticas públicas y mejoras regulatorias que podrían potenciar el incremento de la productividad. Asimismo, la evidencia empírica sobre los principales obstáculos para aumentar la productividad que se muestra en el presente Estudio debería servir a las organizaciones empresariales como insumo para presentar estrategias en diferentes instancias de diálogo social con el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y otras partes interesadas.

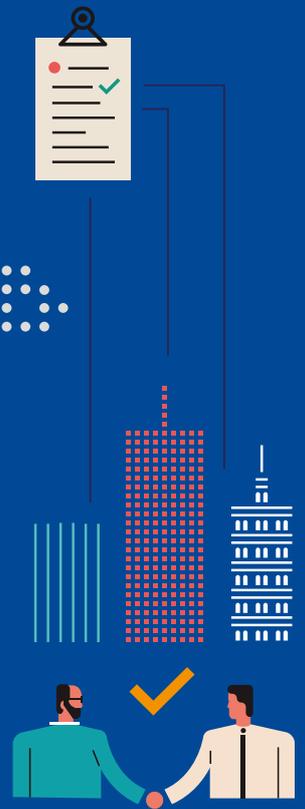
Por último, *Impulsando la productividad en Bolivia*, junto con los otros estudios nacionales realizados por la OIT, nutrirá con datos e información al próximo Informe Regional 2024 *Impulsando la productividad en América Latina*, cuyo objetivo es profundizar el análisis de las políticas públicas capaces de aumentar la productividad de los países de la región para acelerar el crecimiento económico, volver más sostenibles a las empresas, mejorar los ingresos de los trabajadores/as y, por ende, su calidad de vida, a través del acceso a mayores oportunidades de empleo digno y productivo.

Agradecemos a quienes trabajaron con ACT/EMP para elaborar este Estudio Nacional, incluidos los representantes de las organizaciones empresariales que nos dieron su apoyo y tiempo para revisar el documento final. También agradecemos al equipo de consultores principales integrado por Jorge Ramírez (México), Pedro Espaillat (República Dominicana) y Javier Irarrazaval (Chile) por su arduo trabajo de investigación, así como al equipo de investigadores de apoyo Alsacia San Martín, Tomás Larraín Lazcano, y Katherine Javier. Además, agradecemos a María Eugenia Trujillo Ruiz (Perú), quien realizó la revisión de estilo de los textos, y a Ana Periche Acosta por su apoyo en la edición y diseño gráfico de esta publicación. También agradecemos a Tulio Cravo, Especialista Regional de la OIT en Políticas Públicas y Productividad por su apoyo en el proceso de redacción.

El producto final es el resultado de la colaboración de todos los miembros del equipo regional de ACT/EMP en América Latina y el Caribe. En particular, queremos hacer un agradecimiento muy especial al equipo de producción y supervisión general del trabajo realizado, integrado por los Especialistas de ACT/EMP Roberto Villamil, Andrés Yurén y José Luis Viveros.

Claudia Coenjaerts
Directora Regional a.i.
Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe

Deborah France-Massin
Directora
Oficina de Actividades para los
Empleadores de la OIT



“La evidencia empírica muestra que la productividad laboral es el factor económico más importante para fijar los salarios a un nivel que permita a las empresas retener trabajadores y crear empleos. Cuanto mayor sea la productividad, mayor será el nivel de los salarios y mayor la capacidad de las empresas para crear empleos. El crecimiento de la productividad también es una condición necesaria que permite a las empresas mejorar las condiciones generales de trabajo.”

Impulsando la productividad: una guía para organizaciones empresariales
Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT, 2020



Resumen ejecutivo



El presente estudio tiene como objetivo analizar el desempeño de la productividad en Bolivia así como sus principales determinantes. Gracias al impulso de la Oficina Regional de la OIT, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Uruguay se han elaborado estudios nacionales en torno a nueve dimensiones claves para crear un ambiente empresarial propicio para la productividad. Estas dimensiones fueron consensuadas tomando como punto de partida el documento [Impulsando la productividad: una guía para organizaciones empresariales](#) publicado por la Oficina de Actividades con Empleadores de la OIT (ACT/EMP) en noviembre de 2020. Como resultado de este análisis, se emite una serie de guías y acciones de políticas públicas orientadas a potenciar la productividad en Bolivia.

Previamente al análisis de las nueve dimensiones mencionadas, se estudian los niveles de productividad de Bolivia desde la década del noventa: a partir de los datos de The Conference Board, se explora la evolución de la productividad total de los factores (PTF) y la productividad laboral. De manera similar a lo que ocurre en otros países de América Latina y el Caribe, Bolivia se caracteriza por exhibir bajos niveles de productividad. En efecto, según el análisis de los factores de producción, la contribución de la PTF al crecimiento económico ha sido negativa entre 1990 y 2022. Por su parte, el capital ha sido el factor de mayor aporte, responsable de más de la mitad del crecimiento económico desde los años noventa. En lo que respecta a la productividad laboral por trabajador, en las últimas tres décadas esta presentó una tendencia al alza. La misma tendencia positiva se observa en la productividad por hora, que si bien creció en un 40 % entre 2005 y 2022, todavía es dos veces inferior al promedio de América Latina y ocho veces inferior al de Estados Unidos.

La primera dimensión en que se ha basado el análisis, *estabilidad macroeconómica*, abarca una serie de variables asociadas tanto con el crecimiento económico como con la productividad. Desde los años noventa, Bolivia ha triplicado su PIB en términos constantes gracias a sectores tradicionales como la Minería y la Agricultura, en tanto se evidencia el estancamiento del sector Industrial. Esta dependencia de las materias primas ha derivado en una falta de estabilidad de los precios, que se ha traducido en alta inflación —hasta 14 % en 2008— que comenzó a estabilizarse a partir de 2015. Si bien el alto crecimiento promedio favoreció la reducción de los niveles de deuda, estos repuntaron tras la pandemia de la Covid-19 (2021), y se situaban en 85 % del PIB en 2023. Acompañando esta tendencia se observa una reorientación de la fuente de la deuda, que ha reducido su componente externo para dar paso al interno.

La segunda dimensión es el *desarrollo de habilidades y calidad educativa*, dado el estrecho vínculo entre capital humano y productividad. En 2021, en Bolivia la población mayor de 25 años contaba con 9.8 años de escolaridad, por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, el país enfrenta serios retos en materia de calidad educativa: los estudiantes preuniversitarios bolivianos presentan un nivel de logros de aprendizaje inferior al de sus pares de la región, lo que se evidencia en las pruebas nacionales. La ausencia de Bolivia en las pruebas internacionales de aprendizaje dificulta el diagnóstico de la brecha de calidad educativa con la región y priva al país de herramientas consensuadas para evaluar y elevar la calidad de su enseñanza. A esta situación se suma el desfase entre las habilidades que poseen los trabajadores y las requeridas por las empresas. No obstante el Foro Económico Mundial (FEM) afirma que Bolivia está reduciendo esta brecha, en 2018 el país ocupó la 121ª peor posición de 141 países en cuanto a habilidades de la fuerza laboral.

La *falta de inclusividad y flexibilidad de los mercados laborales*, tercera dimensión del análisis, es otro de los factores que frena la productividad. A pesar de que en las últimas dos décadas la tasa de ocupación ha crecido 7 puntos porcentuales (situándose en 74 %), los grupos de poblaciones vulnerables permanecen excluidos: la proporción de mujeres en puestos de gerencia se ha mantenido estancada en las últimas dos décadas, y el 11 % de los jóvenes no estudia ni trabaja. Adicionalmente, el mercado laboral presenta niveles importantes de subempleo que contribuyen al desaprovechamiento del potencial productivo de sus trabajadores.

La *transición para salir de la informalidad* es la cuarta dimensión analizada, una en la que Bolivia quizás enfrenta su mayor reto en materia laboral. A pesar de poseer una tasa de ocupación superior a la de la región, la informalidad en Bolivia es considerable. Los grupos vulnerables son los que se ven más afectados por esta situación, entre los cuales las mujeres, los jóvenes, las personas con bajo nivel educativo y las que residen en zonas rurales presentan la informalidad más apremiante. Las mayores brechas se observan en los grupos de menor educación frente a los que poseen educación avanzada (82 y 53 %, respectivamente), y en los residentes de zonas rurales frente a los de zonas urbanas (96 y 73 %, respectivamente).

La quinta dimensión trata de *emprendimiento e innovación*. En un ambiente de alta informalidad como el boliviano, el emprendimiento por necesidad se abre paso. Si bien las intenciones de emprender presentaban una tendencia al crecimiento hasta el último dato obtenido en 2014, hoy por hoy no se cuenta con datos para conocer el estado real del emprendimiento en el país. En términos de inversión en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB, se observan bajos niveles de innovación en Bolivia: este indicador se estima en 0.17 % del PIB, considerando que los últimos datos oficiales disponibles lo colocan en 0.15 % (2009). Si bien la falta de información actualizada dificulta analizar la innovación en Bolivia, es posible afirmar que se ha registrado un retroceso en la inversión en este rubro, que en el año 2000 se posicionaba en 0.29 % del PIB. Ello se debe, en parte, a la baja participación del sector privado en procesos de innovación, lo que limita la capacidad productiva del país. En efecto, datos del Ministerio de Desarrollo Económico y Plural del año 2016 dan cuenta de que apenas el 8 % de las empresas del sector Servicios, el más innovador de los tres evaluados (Servicios, Comercio y Manufactura), realizó alguna innovación.

El acceso al crédito y a servicios financieros, sexta dimensión del análisis, influye en el emprendimiento, la innovación y la actividad productiva en sentido general. La población boliviana cada vez cuenta con mayor acceso a productos financieros: actualmente, el 68 % reporta poseer una cuenta bancaria, el doble que en 2011. Por su parte, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero describe un acceso histórico superior al 90 %. El acceso al crédito, con 82 de cada 1000 adultos como solicitantes de préstamos a 2021, se coloca por debajo del promedio de la región (262). De igual forma, la porción de préstamos a pymes sobre la cartera de crédito total ha disminuido: en 2013 representaba 27 % y, a marzo 2023, 12.1 %, a pesar de que las tasas de interés y el spread entre tasas activas y pasivas son competitivos frente a los de la región: 8 % frente a 12.4 % y 4.6 % frente a 5.7 %, respectivamente.

En materia de *infraestructura física y digital*, así como en cuanto a *conectividad con mercados internacionales*, séptima dimensión del análisis, aunque Bolivia exhibe avances, se encuentra distanciada de la región. Si bien existe un vínculo estrecho entre la inversión en infraestructura y el crecimiento económico, persiste una brecha de infraestructura importante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como el tercer país de la región con mayor brecha, para cerrarla Bolivia requerirá incrementar las inversiones en un 70 % hasta lograr una inversión del 3.12 % anual del PIB en nuevas construcciones y mantenimiento. Paralelamente, el país ocupó el puesto 122 de 141 países en el pilar de infraestructura del índice de competitividad global de 2019. Asimismo, se observan notorias deficiencias en la infraestructura de transporte, con apenas el 16 % de la infraestructura vial asfaltada o pavimentada; y en cuanto al acceso

al suministro eléctrico, el 12 % de la población no está conectado a energía eléctrica. La infraestructura digital es otra de las áreas que constituye un desafío, puesto que en Bolivia la suscripción a banda ancha fija por cada 100 habitantes es de 9.3, significativamente inferior al 16.8 de Latinoamérica y el Caribe.

En lo que respecta a la institucionalidad, ámbito sobre el cual se fundamentan las economías del mundo, existen dos dimensiones vinculadas: el *derecho de propiedad y el Estado de derecho*, y la *gobernanza y políticas anticorrupción*, octava y novena dimensiones, respectivamente. En las últimas dos décadas, Bolivia no ha logrado mejorar la garantía de los derechos de propiedad, y ha permanecido como una economía reprimida según el índice de libertad económica. En cuanto a Estado de derecho y calidad regulatoria, el país también presenta una tendencia decreciente, con *ranking* percentiles de 11.5 y 11.1 sobre 100, respectivamente, cuando los de la región son cinco veces superiores y los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE), alrededor de ocho. Este deterioro está ligado a la percepción de corrupción, que ha empeorado en la última década al pasar de 34/100 en 2012 a 31/100 en 2022, lo que contrasta con el 66/100 de la OCDE.

El nivel de percepción del control de la corrupción no favorece al indicador anterior. Este índice, medido por el Banco Mundial, ha empeorado entre 2000 y 2021, y ha pasado de un *ranking* percentil de 52.1 a 38.9, cuando el agregado de países de la OCDE ocupaba el percentil 84.4 y el de la región, 52.8. Los procesos de nacionalización de los recursos naturales, la polarización política y la concentración de los poderes del Estado son algunos de los factores que explican esta débil institucionalidad.

El análisis realizado permitió arribar a una serie de recomendaciones de políticas para consensuar y direccionar esfuerzos con el fin de elevar la productividad en Bolivia:

1. Alinear la oferta académica terciaria con la realidad y las necesidades del mercado laboral, con énfasis en la inclusión laboral de los jóvenes.
2. Elevar la calidad educativa presente y futura así como transparentar su medición, para lo cual el país se debe someter a las evaluaciones estandarizadas internacionales e identificar las brechas de habilidades prioritarias para las empresas.
3. Impulsar el trabajo decente y la economía violeta, con énfasis en el diálogo social y con mayores mecanismos de protección social y servicios de cuidado.
4. Reforzar las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como piedra angular del crecimiento productivo mediante el acceso al crédito, la actualización de las normas laborales y tributarias, y el apoyo en su profesionalización y digitalización.
5. Fomentar la innovación y la adaptación tecnológica como motores de cambio del modelo productivo, promover la protección intelectual y fomentar la inversión en investigación y desarrollo.
6. Diversificar la estructura productiva y comercial del país a través del desarrollo de nuevos mercados.
7. Aumentar la inversión en infraestructura y aprovechar los marcos de alianzas público-privadas, especialmente en áreas con alta potencialidad para aportar al crecimiento y fomentar la productividad.
8. Garantizar un Estado de derecho propicio para las inversiones, especialmente para aquellas relativas a la explotación de recursos naturales; y realizar esfuerzos que incidan en el control de la corrupción, entre ellos acentuar la separación de los poderes del Estado, fortalecer el Sistema Judicial y profesionalizar la función pública.

Capítulo 1

La productividad en Bolivia

En este capítulo se analiza la evolución de la productividad en Bolivia a través del estudio de algunos de sus principales indicadores, con la ayuda de los datos de The Conference Board complementados por otras fuentes.

Uno de los indicadores que se suele utilizar para estimar la productividad de una economía es la productividad total de los factores (PTF), que calcula la eficiencia con la que se combinan los insumos de producción (mano de obra, capital y bienes intermedios) cuando se realiza un bien o se brinda un servicio. El crecimiento de la PTF está relacionado con diversas variables, entre ellas la innovación y las mejoras tecnológicas (Kim y Loayza, 2019) así como el capital humano (educación y salud), la intensidad y eficiencia con que se utilizan el capital y la mano de obra, la calidad de la gestión empresarial (Bloom et al., 2016; Bloom y Reenen, 2007), los cambios en las instituciones o regulaciones, y la disponibilidad de infraestructura (Moss et al., 2020; Kim y Loayza, 2019; Isaksson, 2007). A pesar de algunos inconvenientes metodológicos y contables, la PTF constituye una medida ampliamente usada en Economía debido a su simpleza y comparabilidad con otros países y a través del tiempo.

Por otro lado, el incremento de la PTF está estrechamente vinculado con el crecimiento económico (OIT, 2020). En efecto, la evidencia demuestra que, en las últimas tres décadas, el crecimiento del PIB de Bolivia se ha correlacionado positivamente y se ha situado en 0.4 (1990-2019), 0.1 (2006-2019) y 0.9 (2014-2019). La formación bruta de capital privado y la inversión extranjera directa también generaron una correlación positiva en la productividad (CEPB, 2022).

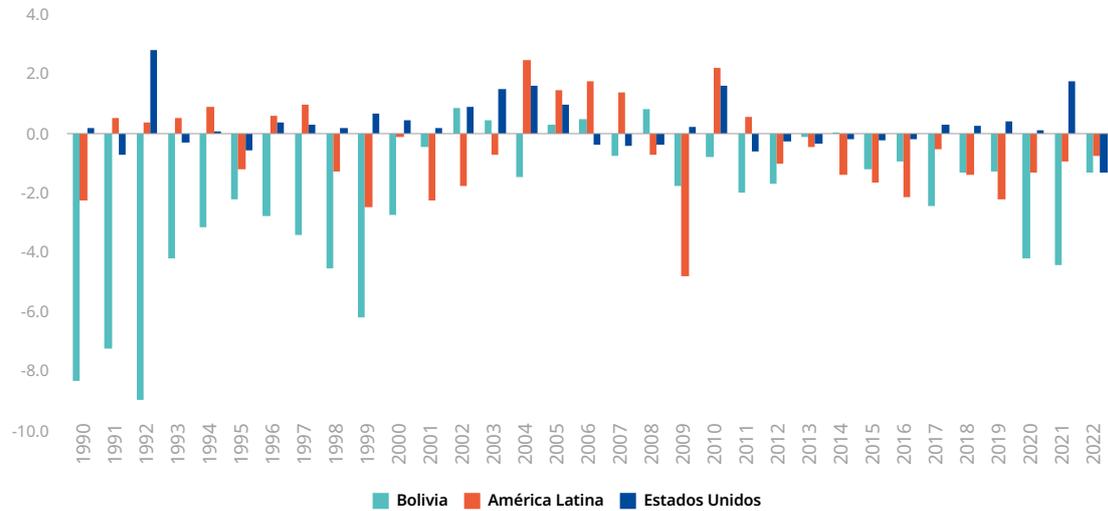
En lo que respecta al crecimiento de la PTF en Bolivia, según las estimaciones de The Conference Board este se caracterizó por ser negativo (-5.1) en la década del noventa, y no fue hasta 2002 que se registraron variaciones positivas: 0.8 y 0.4 en 2002 y 2003, respectivamente. Sin embargo, esta tendencia se vio interrumpida por un periodo intermitente de crecimiento y decrecimiento de la productividad que persistió hasta 2022. En efecto, entre 2000 y 2010 Bolivia alcanzó un crecimiento promedio en PTF negativo equivalente a -0.5 % que empeoró en la última década, periodo en el cual se ha triplicado el decrecimiento promedio de la productividad hasta situarse en -1.8 % entre 2011 y 2021. De la misma forma, durante el llamado “periodo de bonanza 2005-2014” la PTF llegó a un promedio de decrecimiento de -0.5 %.

En comparación con el desempeño de América Latina en la última década, Bolivia presenta un decrecimiento superior: mientras que la región presenta un crecimiento negativo de -1.1 % entre 2011 y 2021, el país andino exhibe 0.7 puntos porcentuales menos. Si en el mismo periodo comparamos Bolivia con Estados Unidos —economía considerada en la frontera de la productividad—, la diferencia es aun mayor. De hecho, en 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que la PTF de Bolivia era menor al 40 % en relación con Estados Unidos y que estaba por debajo de un país típico de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, es importante destacar que en 2022 el posicionamiento relativo de Bolivia evidenció una mejora: aunque el desempeño de su PTF fue negativo (-1.3 %), se ubicó a la par del nivel de Estados Unidos y su brecha con la región decreció (-0.5 puntos porcentuales).

Figura 1.1

Crecimiento de la productividad total de los factores²

Porcentaje

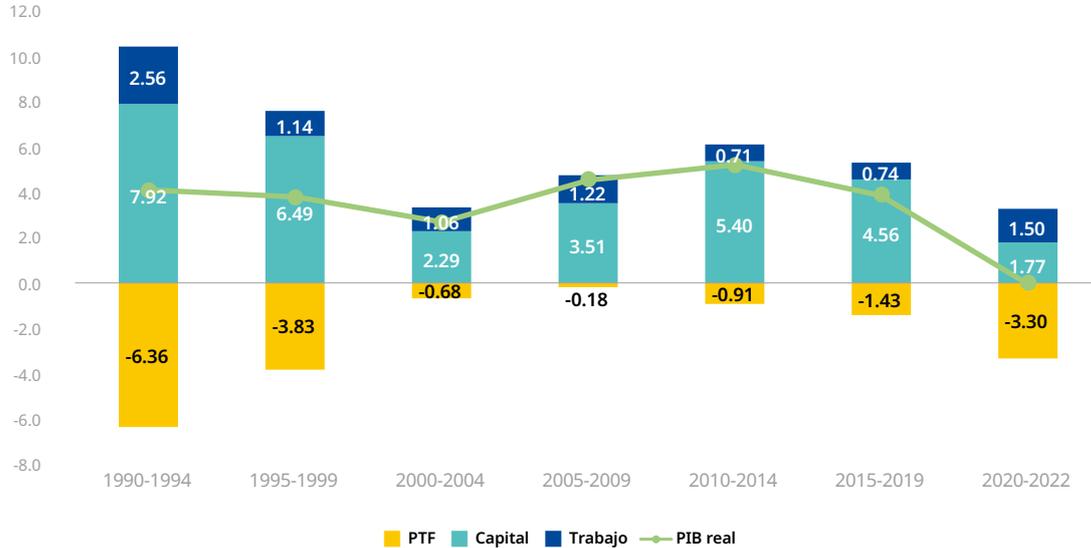


Fuente: The Conference Board

Figura 1.2

Contribución de los factores al crecimiento

Puntos porcentuales



Fuente: The Conference Board

2 The Conference Board utiliza un modelo de contabilidad del crecimiento para PTF (Solow Model). Para más información, puede consultar <https://www.conference-board.org/data/economydatabase/total-economy-database-methodology>. En cuanto a los datos de The Conference Board, el promedio de Latinoamérica y el Caribe está basado en dieciséis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Cuando se analiza la contribución de cada factor de producción al crecimiento de la economía, es notorio que la PTF no ha desempeñado un papel protagónico: de hecho, entre 1990 y 2022 su contribución ha sido negativa, oscilando entre -0.2 y -6.4 puntos porcentuales. Este resultado es similar al del estudio realizado por Fernández-Arias (2014), que concluye que la PTF ha sido la principal causante del lento crecimiento en Latinoamérica y el Caribe.

El capital ha sido el factor que, lustro tras lustro, ha presentado la mayor contribución al crecimiento: la más alta, de 7.9 puntos porcentuales, se dio al inicio de la década del noventa; mientras que la más baja, de 1.7 puntos porcentuales, se dio entre 2000 y 2004, de acuerdo con estimaciones de The Conference Board. La versión más reciente de la Penn World Table coloca la participación de capital en 0.50 en 2019 y en 0.51 en promedio entre 1990 y 2019³: si bien capital y trabajo contribuyen al crecimiento de forma similar, el primero tiene un mayor impacto. Desde los años noventa, ambos exhiben un aporte positivo y constante en la economía boliviana, incluyendo el periodo 2020-2022, el de menor crecimiento registrado de la serie. Sin embargo, destaca que el capital relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) representa en la serie un promedio de 9 % del crecimiento aportado por el capital total; es decir, el aporte ha sido mayoritariamente en capital más físico y tradicional. Si bien los estimados de The Conference Board tienden a dar más peso a los servicios de capital, la magnitud de la contribución estimada agrega valor a su importancia.

Otro indicador que se utiliza para medir la productividad es la productividad laboral por trabajador, que se calcula dividiendo el PIB de una economía entre la cantidad de personas empleadas; esto en contraste con indicadores como el PIB per cápita, cuyo objetivo es dimensionar el estándar de vida de un país. Con respecto a este tema, en las últimas tres décadas la productividad laboral por trabajador de Bolivia presenta una tendencia alcista, interrumpida por la pandemia de la Covid-19: mientras que en 1990 se reportaban \$ 12 865 por trabajador (\$ 5656 PIB per cápita), en 2022 la cifra se elevaba a \$ 21 388 (\$ 9828 PIB per cápita) ajustados a paridad de poder adquisitivo (en dólares internacionales)⁴. Esta variación demuestra un crecimiento importante de Bolivia de 1.6 veces en el periodo analizado. Sin embargo, al compararse con América Latina, el país presenta una productividad significativamente inferior que el promedio regional: en 2022, América Latina reportaba una productividad por trabajador equivalente a \$ 41 840, cerca de dos veces superior a la productividad boliviana. Cuando se contrasta la productividad laboral promedio con la de Estados Unidos (\$ 158,039), la diferencia es notable: cerca de ocho veces superior a la de Bolivia.

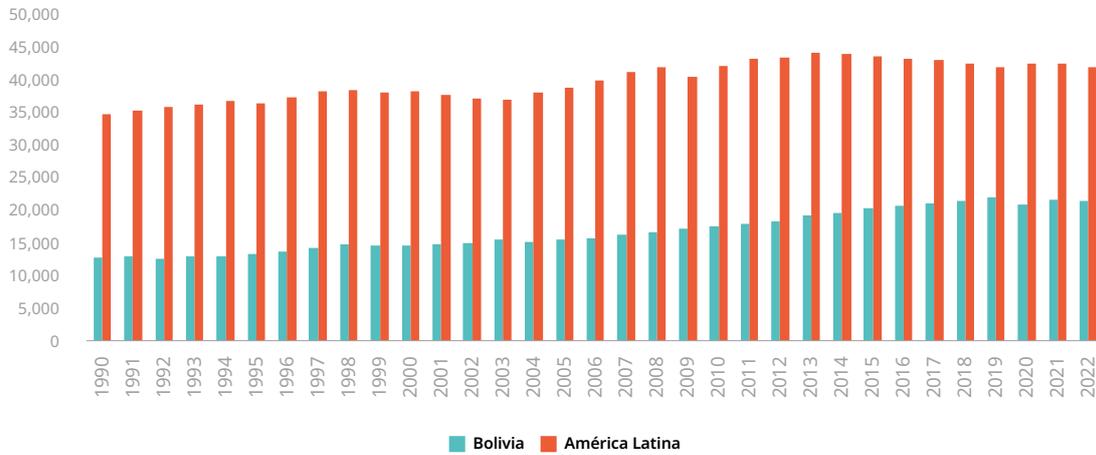
3 Penn World Table es una fuente de información reconocida que utiliza una función de producción Cobb-Douglas en sus estimaciones.

4 La paridad de poder adquisitivo es un indicador económico para comparar el nivel de vida entre distintos países: las monedas de los países son homologadas en una moneda de referencia para reflejar el mismo poder de adquirir bienes y servicios en cada país.

Figura 1.3

Productividad laboral por trabajador

Paridad de poder adquisitivo, \$ precios internacionales 2022



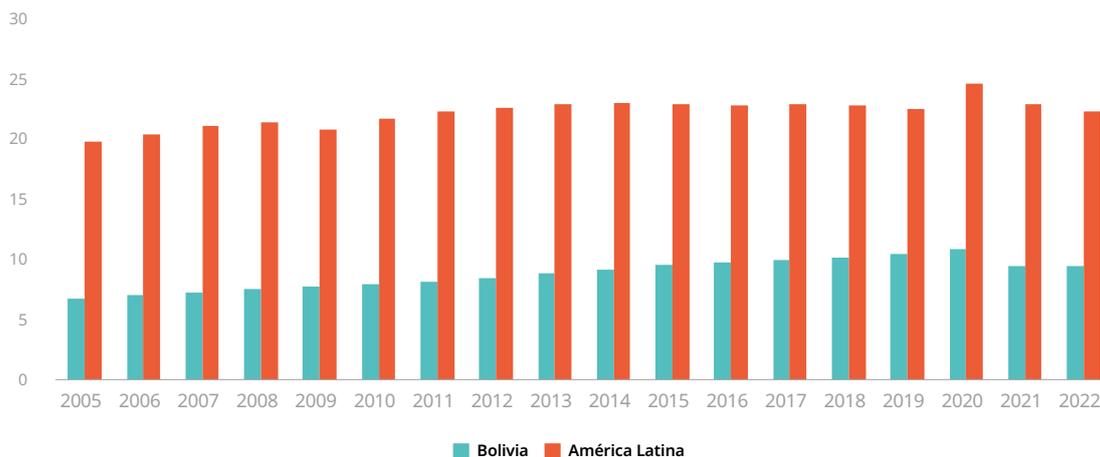
Fuente: The Conference Board

La productividad laboral también puede medirse por hora trabajada, indicador más recomendado para los países en desarrollo porque permite visualizar mejor el impacto y la realidad del subempleo (OIT, 2020). La serie disponible para el periodo 2005-2022 también presenta una tendencia al alza: en efecto, en la productividad laboral por hora, la paridad de poder adquisitivo es de \$ 6.8 a \$ 9.5 entre 2005 y 2022, lo que significa un crecimiento de 40 %. No obstante, el promedio boliviano permanece por debajo del de América Latina, que en 2021 alcanzó \$ 22.3, más del doble que el desempeño de la nación analizada. En el caso de Estados Unidos, la productividad laboral por hora trabajada fue de \$ 87.7 en 2022, lo que da cuenta de la disparidad entre este país y la región (3.9 veces inferior) y Bolivia (9 veces inferior) .

Figura 1.4

Productividad laboral por hora trabajada

Paridad de poder adquisitivo, \$ precios internacionales 2022



Fuente: The Conference Board

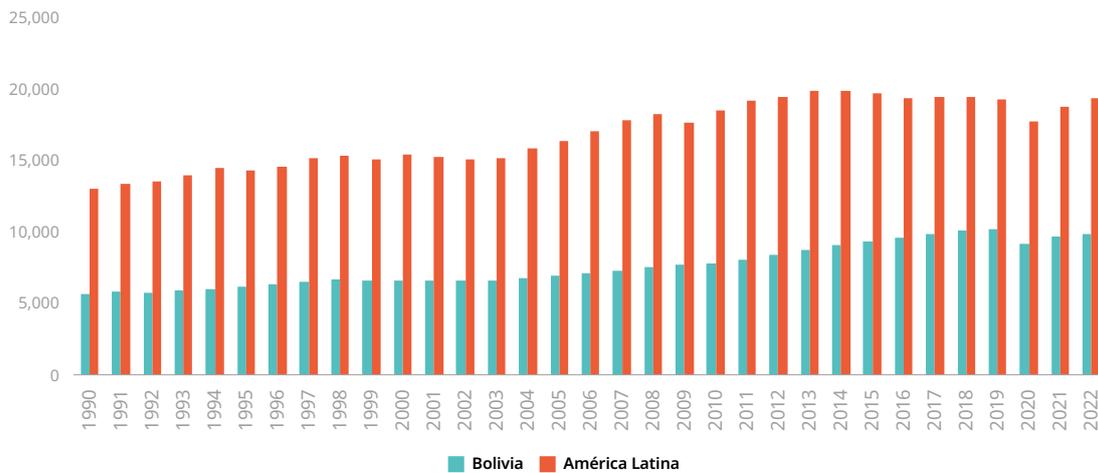
En paralelo con la productividad, interesa conocer cómo las variaciones en la actividad productiva se han traducido en mejoras en el nivel de vida de los individuos. El PIB per cápita es una medida que ilustra cuánto se benefician los individuos de una cierta economía de su producción: se trata de un indicador que permite comparar el nivel de vida y desarrollo entre los países, por lo que suele utilizarse para dimensionar las posibilidades económicas de los habitantes de una nación. El incremento de la productividad que se ha presentado en Bolivia desde 1990 se ve traducido en un mayor PIB per cápita: mientras que la productividad laboral por trabajador se ha multiplicado alrededor de 1.66 veces en este periodo, el PIB per cápita se ha multiplicado 1.73 veces, pasando de \$ 5656 en 1990 a \$ 9828 en 2022. Sin embargo, este nivel de PIB per cápita todavía se encuentra distante del promedio regional, que en 2022 se situó en \$ 19 317.

El índice de Gini⁵, que mide la distribución de ingresos en una nación, complementa la interpretación del valor del PIB per cápita. Bolivia es un país con un bajo nivel de desigualdad comparado con Latinoamérica y el Caribe, lo que sugiere que la distribución de los ingresos generados por estos incrementos en productividad es más eficiente que la de sus pares regionales. En 2021 Bolivia presentaba un valor de 40.9 en este índice, uno de los más bajos de la región, donde países como Colombia (51.1) y Brasil (52.9) llevan la delantera en desigualdad. Sin embargo, es importante precisar que hablamos de la región más desigual del mundo, por lo que situarse en la vanguardia de este grupo de países no significa que no existan retos importantes para superar la desigualdad.

Figura 1.5

PIB per cápita

Paridad de poder adquisitivo, \$ precios internacionales 2022



Fuente: The Conference Board

⁵ Cerca de 100 implica desigualdad perfecta y cerca de 0, igualdad perfecta.

Capítulo 2

Entorno empresarial propicio para la productividad

2.1. Estabilidad macroeconómica

La estabilidad macroeconómica es uno de los pilares de un entorno empresarial que promueve la productividad, e incluye la estabilidad de precios, políticas fiscales sólidas, índices de endeudamiento sostenibles, balances robustos en los sectores público y privado, y un funcionamiento saludable de la economía real (Ocampo, 2005). En este acápite se exploran algunas de las variables que ayudan a entender la estabilidad macroeconómica de Bolivia con miras a impulsar su productividad.

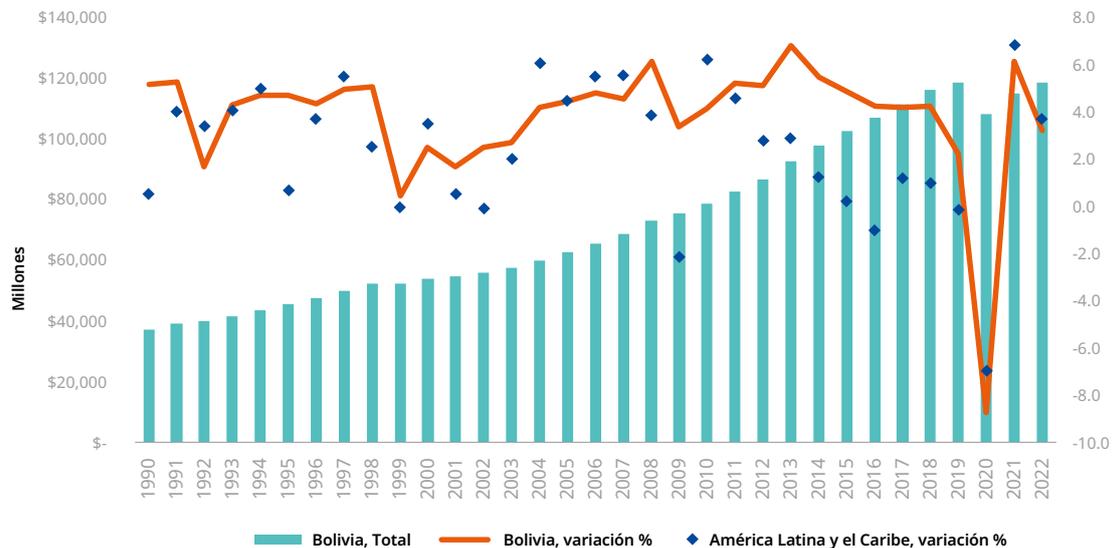
La economía boliviana ha crecido de manera importante desde inicios de los años noventa, durante los cuales ha visto su PIB triplicarse en términos constantes: de USD 37.2 mil millones en 1990 a USD 118.6 mil millones en 2019. Un periodo de extraordinario desempeño fue el de 2006 a 2016, en el que Bolivia experimentó una tasa de crecimiento promedio de alrededor del 5 %. Esta fase de prosperidad se atribuye al incremento de los precios internacionales de algunos de los principales rubros de exportación del país andino tales como gas, petróleo, oro y estaño, lo que derivó en que las exportaciones se duplicaran y pasaran de representar cerca del 20 % del PIB a más del 40 % (De la Cruz, 2020). Bolivia continúa siendo un país dependiente de los precios de sus recursos naturales (CEPB-OIT, 2021), lo que se evidencia en el hecho de que no haya logrado transformar estructuralmente su economía, con un sector Industrial que ha permanecido en alrededor del 17 % del PIB durante las últimas tres décadas (CEPB-OIT, 2021).

La trayectoria boliviana se ha visto afectada por algunos periodos de crisis durante los cuales la economía experimentó una contracción en su nivel de crecimiento; al respecto, resalta 1999, con un crecimiento del PIB de apenas 0.4 %. Aunque se mantuvieron niveles de crecimiento entre moderados y altos, Bolivia experimentó una desaceleración marcada desde 2014 hasta la llegada de la crisis sanitaria, al pasar de un crecimiento de 6.8 % en 2013 a 2.2 % en 2019. Como consecuencia de la crisis económica y sanitaria generada por la Covid-19, en 2020 el crecimiento de Bolivia se vio impactado de manera significativa: la economía promedió una tasa de crecimiento de -8.7 %, desempeño inferior al de Latinoamérica y el Caribe, que durante el mismo periodo alcanzó una tasa de -6.9 %. No obstante, para 2022 la economía andina logró repuntar y alcanzó un crecimiento de 3.2 %, cercano al de sus pares de la región (3.7 %). Si bien la economía boliviana aún no recupera los niveles de alto crecimiento experimentados antes de la pandemia, la desaceleración que se venía presentado antes de ella indica que la debilidad en recuperarse concuerda con la dependencia de los precios de sus minerales y con la baja diversificación de su modelo productivo.

Figura 2.1.1

Evolución del PIB

Paridad de poder adquisitivo, \$ precios internacionales constantes 2022



Fuente: The Conference Board

Eje izquierdo: PIB total; eje derecho: crecimiento del PIB.

Hay que destacar que si bien el crecimiento experimentado por la economía boliviana la ha llevado a ganar participación en América Latina y el Caribe —donde ha pasado de representar el 0.7 % del PIB de la región en 1990 al 1 % en 2022—, Bolivia todavía se sitúa como uno de los países andinos cuyo aporte al PIB de la región es menor.

Por su parte, la estabilidad de precios denota un ambiente propicio para la productividad y el uso eficiente de los recursos (Araujo et al., 2014). Además, una mayor productividad conlleva una presión a la baja sobre la inflación al reducirse el costo por unidad y aumentar la oferta de productos y servicios (WEF, 2022). En Bolivia, el nivel de precios al consumidor atravesó periodos de alta inflación en los años noventa, como en otras economías de la región; sin embargo, luego de estabilizarse a finales de este periodo, ha presentado importantes fluctuaciones en las últimas dos décadas hasta regularse a partir de 2015.

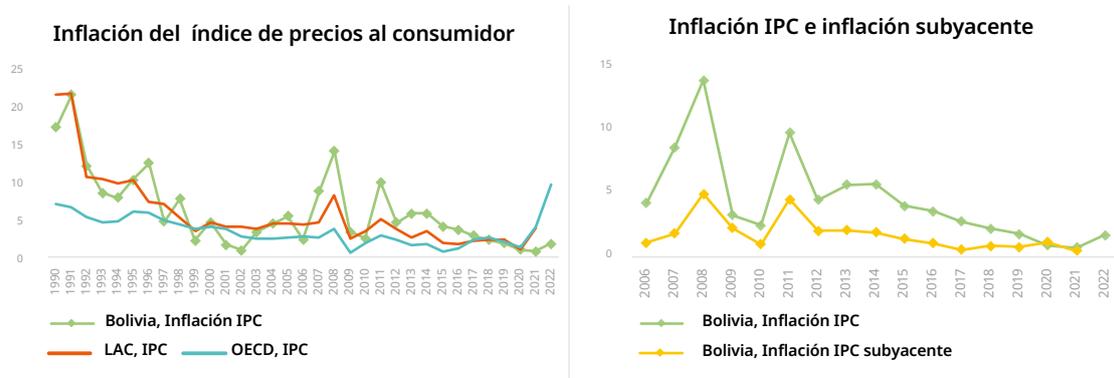
Entre 2006 y 2022, la inflación boliviana promedió un 4.5 %, cifra superior al promedio de Latinoamérica y el Caribe, que fue de 3.3 %. A pesar de ello, en 2008 llegó a situarse en 14 % —la más alta del Cono Sur— como consecuencia de incrementos irregulares en los precios de las materias primas, de manera similar a lo ocurrido en 2011 con el aceleramiento de la demanda mundial de alimentos tras la crisis financiera internacional de 2008-2010 (Mora, 2013). Por su parte, a partir de 2015 la tendencia ha sido a la baja y no ha superado niveles del 4.5 %. De manera particular, entre 2018 y 2021 Bolivia ha presentado los niveles de inflación promedio más bajos de la región, incluyendo a los países de la OCDE: en el año 2022, por ejemplo, la inflación fue de 1.75 %, una de las más bajas de América Latina y el Caribe, a pesar del escenario inflacionario que atravesó la región durante ese año.

La inflación subyacente es usada como señal de la tendencia real de la inflación a largo plazo, ya que se calcula excluyendo los ítems más volátiles del índice de precios al consumidor, tales como energía y alimentos. En 2009 y durante el periodo 2017-2022, la inflación generalizada y la subyacente presentaron niveles similares, en el orden del 2 %. Esta paridad en los niveles de inflación sugiere que los precios no se han visto afectados por factores externos, situación que puede explicarse por la ausencia de shocks de oferta y demanda que se justifican, entre otras razones, por la estabilidad de los precios de los hidrocarburos durante este periodo, por el control de precios para algunos productos de la canasta familiar así como por las subvenciones.

Figuras 2.1.2 y 2.1.3

Inflación anual IPC e inflación subyacente

Porcentaje anual



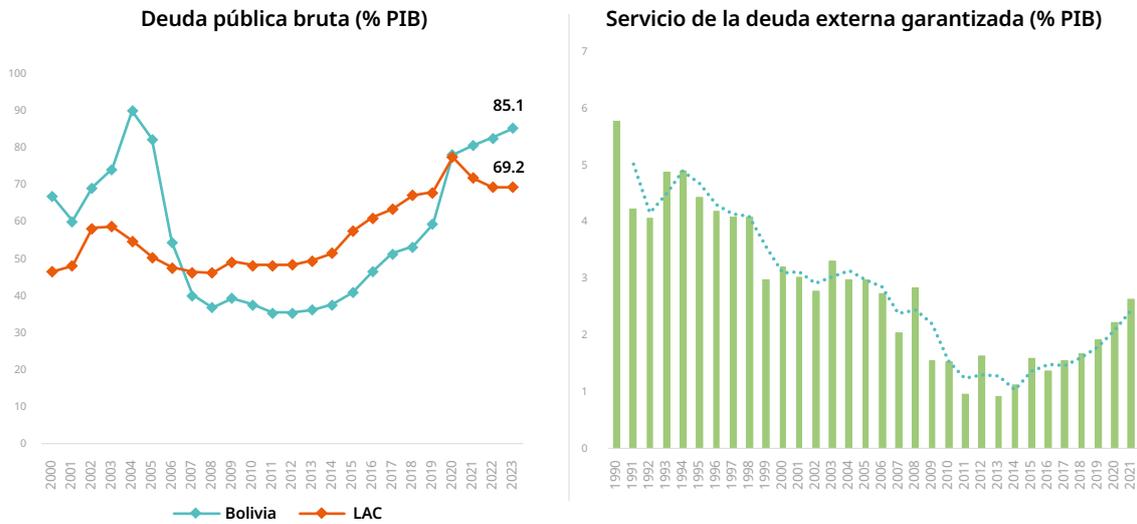
Fuente: Banco Mundial (2021). Para Bolivia, el IPC subyacente es un estimado y no una cifra oficial.

Durante el periodo 2000-2023, la deuda pública en Bolivia, como porcentaje del PIB, promedió 57.2 %, ligeramente más alta que el promedio de los países de la región, que fue de 56.5 %. Entre 2000 y 2006 persistía una brecha entre la deuda pública boliviana promedio como porcentaje del PIB y la de la región, diferencia que alcanzó su pico en 2004, cuando el nivel de deuda del país superó al de la región en 35 puntos porcentuales. Después de 2006 el nivel de deuda empezó a ser controlado y se mantuvo por debajo del promedio regional y en cifras inferiores al 60 % hasta 2019. El extraordinario crecimiento económico observado entre 2006 y 2016 —impulsado, principalmente, por el incremento de los precios de las exportaciones— contribuyó a mitigar los niveles de deuda como porcentaje del PIB. Otro factor que favoreció la reducción de la deuda fue la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral gestionada antes de la presidencia de Evo Morales pero ejecutada durante su administración, que implicó una reducción de la deuda externa en USD 2500 millones (De la Cruz, 2020).

Sin embargo, a partir de 2017 el nivel de deuda comenzó a crecer de manera consistente: en 2020, tras la crisis sanitaria y económica producto de la Covid-19, repuntó y llegó a alcanzar el 78 % hasta situarse en 85.1 % en 2023. La alta dependencia de la economía boliviana de sus recursos naturales la llevan a constituirse en una economía estructuralmente deficitaria. Ello determina, a su vez, que cuando se producen incrementos internacionales de los precios de los bienes exportables, se perciben mayores ingresos fiscales capaces de sostener los niveles de inversión y gasto aunque solo durante tales periodos de bonanza, mientras se ignora la generación de ahorros (CEPB-OIT, 2021). En tal sentido, en tiempos de baja de los ingresos fiscales, la economía recurre de manera constante a la deuda para solventar sus finanzas, con una inclinación hacia el financiamiento interno en los últimos años (CEPB, 2022; CEPB-OIT, 2021).

Figuras 2.1.4 y 2.1.5

Deuda pública bruta y Servicio de la deuda externa garantizada



Fuente: FMI, World Economic Outlook y Banco Mundial, International Debt Statistics.

Cuando se analiza el servicio de la deuda externa en términos del PIB, se observa una tendencia similar. A pesar de que el saldo de la deuda pública externa boliviana aumentó de USD 3779 millones⁶ en 1990 a USD 12 698 millones en 2021, el servicio de la deuda se redujo, y pasó de representar el 5.8 % del PIB al inicio de la serie al 2.6 % en 2021. Este decrecimiento del servicio de la deuda puede ser explicado principalmente por dos factores: en primer lugar, el auge de la economía boliviana que supuso un crecimiento del PIB casi sostenido durante las últimas dos décadas; y, en segundo lugar, el aumento del crédito interno proporcionalmente mayor al del crédito externo. En el año 2000, la deuda pública externa representaba el 53 % del PIB; mientras que la interna, el 11 %. En 2021 estas cifras se sitúan en 31.2 % y 14.3 %, respectivamente, lo que sugiere que la deuda interna pasó de representar el 17.5 % de la deuda pública total en el año 2000 al 31.4 % en 2021 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2022).

6 Dato no disponible en la serie del FMI. Obtenido de Fundación Jubileo (2018).

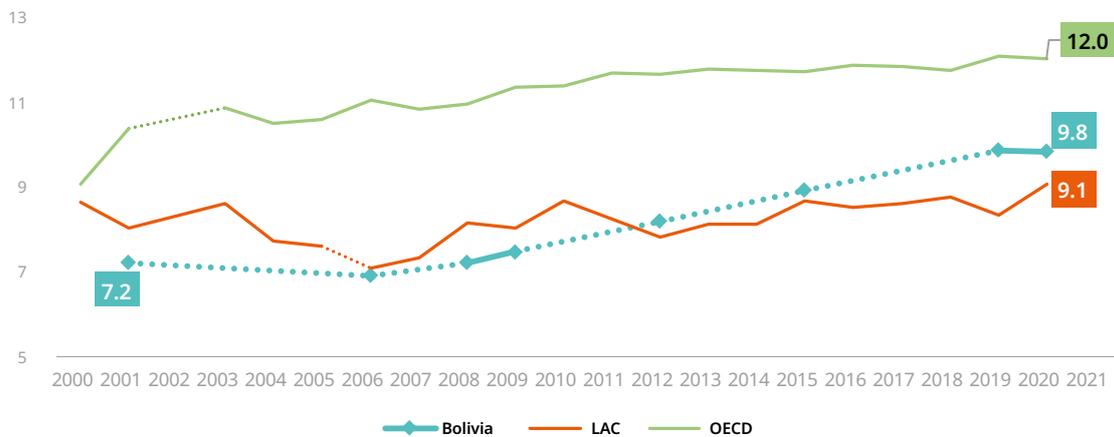
2.2. Desarrollo de habilidades y calidad educativa

La educación es uno de los factores más determinantes de la productividad de un país, ya que constituye el fundamento de una fuerza laboral capacitada y de alto valor agregado (Becker, 1994; CBI, 2017; Young et al., 2017; OIT, 2020). Para conocer el estado de las habilidades y la calidad educativa de Bolivia así como su aprovechamiento por parte de la fuerza laboral, en esta sección se exploran distintos indicadores.

Figura 2.2.1

Años de escolaridad promedio

Población 25+



Fuente: Unesco

En las últimas dos décadas, en Bolivia se han elevado los años promedio de escolaridad de la población mayor de 25 años, que han pasado de 7.2 en el año 2000 a 9.8 en 2021, lo que sitúa al país por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe. A pesar de este crecimiento, la brecha entre el desempeño de Bolivia y el de los países pertenecientes a la OCDE se ha ensanchado, lo que evidencia un rezago en el avance educativo: en el año 2000, esta brecha era de 1.8 años de escolaridad, mientras que a 2021 era de 2.2 años. Hay que considerar que 9.8 años de escolaridad suponen una educación preuniversitaria inconclusa, lo que sugiere que un gran número de bolivianos carece de las habilidades técnicas y las competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral de manera adecuada e impulsar la economía a través del empleo en sectores de alto valor agregado que requieren mano de obra más preparada.

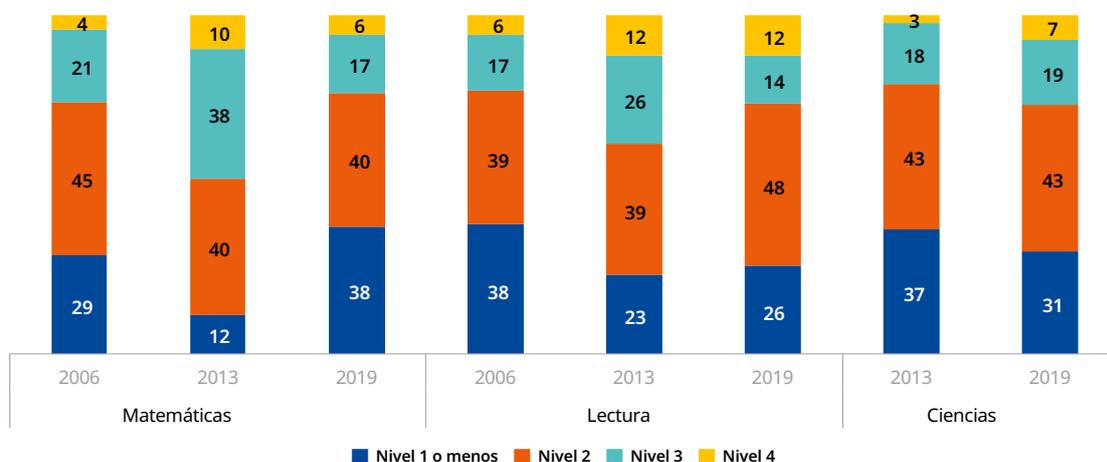
Si bien es necesario aumentar la cantidad de años promedio, no lo es menos que la educación brindada sea una de calidad, que otorgue las competencias necesarias para el desarrollo de las personas y las economías. Al respecto, Bolivia es uno de los pocos países de América Latina que no se ha sometido a evaluaciones estandarizadas para medir los niveles de aprendizaje de sus estudiantes en las últimas dos décadas: el país andino nunca ha participado en las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) administradas por la OCDE que se aplican desde el año 2003 en otros países de la región, ni ha participado nuevamente en las pruebas ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo) del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) de la Unesco desde que se sometió a la primera prueba en 1997. La ausencia de Bolivia en las pruebas internacionales se sustentaba en el paradigma del “Vivir Bien” instalado en el centro del desarrollo de las políticas públicas con la llegada de Evo Morales a la presidencia, filosofía que buscaba rescatar la incorporación de los pueblos indígenas en el sistema educativo y alejarse de los esquemas tradicionales a los que considera excluyentes, entre ellos las pruebas estandarizadas, que “reflejaban una realidad parcial” (Calla, 2020).

A pesar de esta visión contracorriente, las autoridades educativas bolivianas han realizado esfuerzos para conocer cómo ha evolucionado el nivel de logro de aprendizajes de sus estudiantes. Así, en 2017 aplicó pruebas diagnósticas para evaluar la calidad de su sistema educativo según la Ley de Educación nro. 70. A partir de los datos obtenidos, el Ministerio de Educación de Bolivia realizó un cálculo de comparabilidad con la prueba ERCE que permite situar el desempeño de sus estudiantes según nivel y área de estudio frente al desempeño de los estudiantes de la región. Como resultado, se encontró que el desempeño de los estudiantes bolivianos de 6.º grado era significativamente inferior al del promedio de estudiantes de América Latina y el Caribe. El peor desempeño se observa en Matemáticas, materia en la que el 62 % se situó por debajo del nivel 2 —superando en 15 puntos porcentuales la distribución regional—, mientras que solo el 2 % alcanzó el nivel 4.

Figura 2.2.2

Porcentaje de estudiantes según nivel de pruebas ERCE

6.º grado, año 2017



Fuente: Ministerio de Educación de Bolivia, OPCE, <https://opce.gob.bo/webopce/index.php/archivo/evaluaciones>.

El mejor desempeño de Bolivia se observa en Lectura, área en la que un 32 % de los estudiantes de 6.º grado alcanza un nivel 1 o inferior; sin embargo, también es el área de mayor brecha con respecto a la región: la proporción de estudiantes por debajo del nivel mínimo fue cercana al doble de la proporción de la región (1.77 veces). En Ciencias, los estudiantes bolivianos también exhibieron un desempeño bajo: el 53 % se encuentra debajo del nivel mínimo, es decir, la menor exigencia cognitiva que se espera de un joven de 15 años. Dicho de otra manera, 1 de cada 2 estudiantes de 6.º grado no domina conceptos básicos de Ciencias que corresponden a su edad.

El que la escolaridad promedio de la población no supere el nivel Secundaria y que la calidad educativa sea deficiente son dos aspectos que repercuten en el nivel Superior. De acuerdo con un informe elaborado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la OIT —con 576 empresas encuestadas para conocer los principales desafíos estructurales del sector privado—, la oferta académica en el nivel terciario y su calidad están desconectadas de la realidad del mercado laboral (CEPB-OIT, 2021). Por su parte, las reformas educativas impulsadas no han tenido en cuenta las demandas del aparato productivo, y solo tres de cada diez bachilleres eligen carreras técnicas (CEPB-OIT, 2021). Esta falta de alineamiento con las necesidades de los empleadores y con la demanda laboral redundó en desempleo, subempleo, niveles de informalidad, bajos salarios y baja productividad.

Los efectos de invertir en más y mejor educación son explícitos en el mercado laboral boliviano: las personas con educación avanzada exhiben un nivel de participación laboral superior al promedio nacional, y se sitúan en un 83.7 % en 2021. Este nivel se ha mantenido durante las últimas dos décadas con excepción de los periodos de crisis económica (2004, 2016-2018), cuando se situó en alrededor del 75 %. De hecho, la participación laboral de las personas con educación avanzada es superior al promedio regional y al de la OCDE, lo que evidencia que el mercado laboral boliviano valora la educación.

Figura 2.2.3

Comparativo entre participación laboral total (PL) y educación avanzada (PLEA)⁷



Fuente: Ilostat

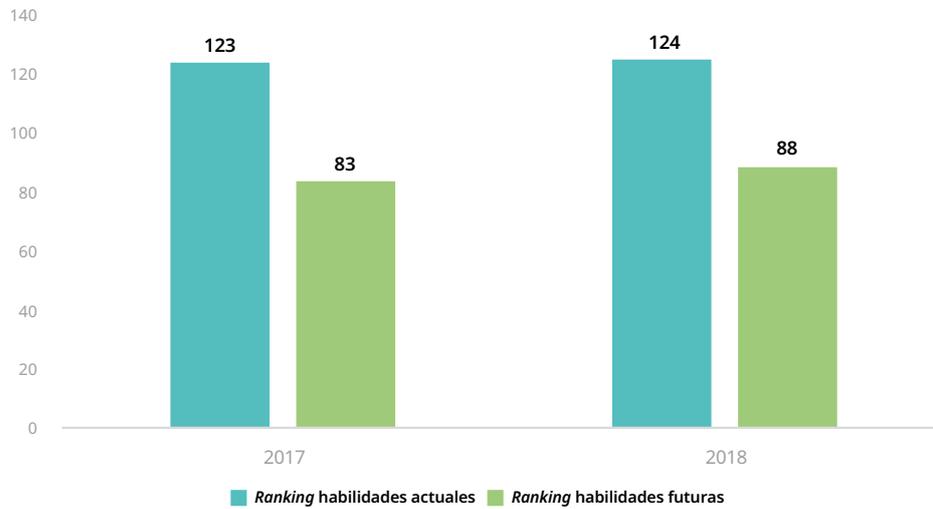
El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial (FEM) sugiere que Bolivia se orienta a la reducción del desajuste entre habilidades y empleo: en 2017, la fuerza laboral experimentaba un ranking menor en sus habilidades actuales frente a las habilidades requeridas en el futuro, lo que demuestra la anticipación del mercado laboral a sus necesidades próximas. Sin embargo, de 141 países analizados en 2018 en habilidades presentes de la fuerza laboral, Bolivia ocupó el lugar 124. Este posicionamiento revela los esfuerzos que debe realizar el país para elevar el capital humano presente de manera que la fuerza laboral esté capacitada para enfrentar los retos económicos actuales. A modo de comparación, el ranking de la fuerza laboral futura a 2019 fue de 34 en Costa Rica, 56 en Argentina, 71 en Chile, 93 en Ecuador y 102 en México. En contraste, Singapur ocupó el puesto número 3 y Estados Unidos, el 12 (WEF, 2019). Hay que recordar que este indicador mide la percepción de los empleadores sobre el desajuste de las habilidades en sus países y no es una comparación del nivel de habilidades entre los países.

⁷ La participación laboral con educación avanzada se calcula dividiendo la fuerza laboral con educación avanzada entre la población en edad de trabajo (de 15 a 64 años) con educación avanzada.

Figura 2.2.4

Ranking de habilidades

140 países en 2017 y 141 en 2018



Fuente: Foro Económico Mundial

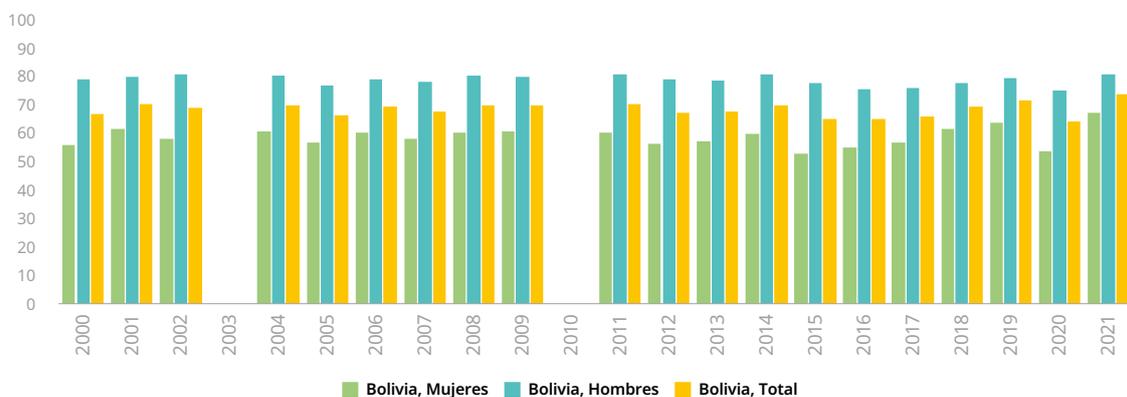
2.3. Mercados laborales inclusivos y flexibles

En general, algunos grupos como las mujeres; las personas jóvenes, mayores, con discapacidades y de color; y los trabajadores con habilidades bajas permanecen desempleados o subempleados, y, asimismo, enfrentan mayores barreras y discriminación laboral (OCDE, 2013; FMI, 2021; OIT 2022a). Esta situación no solo genera el desaprovechamiento de recursos y talentos, sino que produce un efecto nocivo en los integrantes de estos grupos, que sufren más durante las crisis (OIT, 2022a; OCDE, 2022b), a pesar de que numerosos estudios han demostrado lo positivo que resulta incluirlos e invertir en ellos. Así por ejemplo, Hsieh et al. (2019) estiman que la mejora del acceso laboral sobre la base de género y raza en Estados Unidos entre 1960 y 2010 explica del 20 al 40 % del crecimiento de su PIB.

Figura 2.3.1

Tasa de ocupación

Porcentaje



Fuente: Ilostat

A lo largo de las últimas dos décadas, la tasa de ocupación de Bolivia ha presentado mejorías: mientras que en el año 2000 era de 67 %, en 2021 se situaba en 73.8 %, lo que equivale a un crecimiento de 7 puntos porcentuales. Esta tasa de ocupación es superior a la de los países de América Latina y el Caribe estudiados, que se ha mantenido relativamente estable durante la década y, a 2021, era de 55.9 %, 18 puntos porcentuales menor que la de Bolivia.

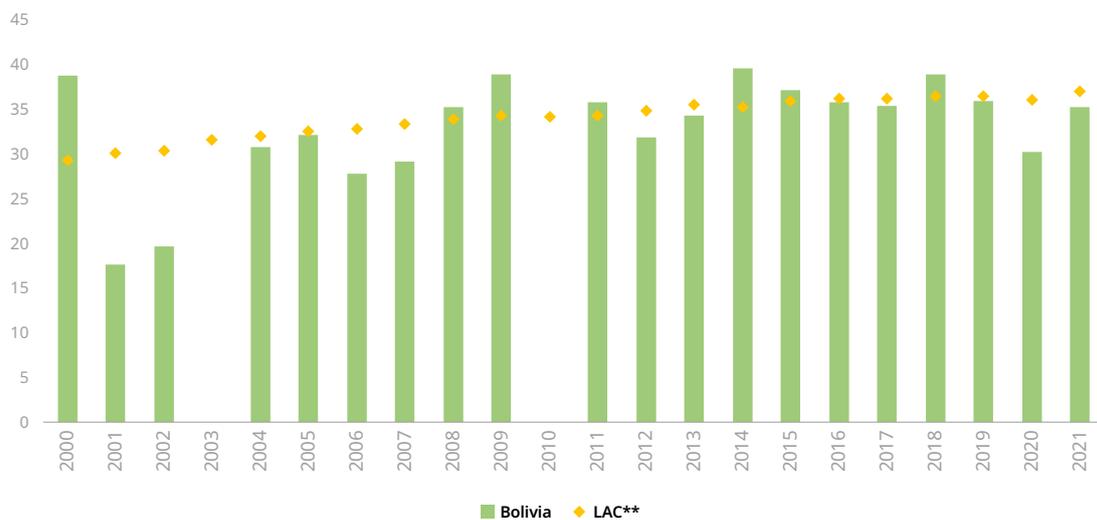
El incremento de la tasa de ocupación boliviana se ha traducido en reducciones en la brecha laboral de género. En efecto, la ocupación laboral de las mujeres aumentó de 56 a 67.2 % durante el periodo 2000-2021 (11 puntos porcentuales) y, en contraste, la tasa de ocupación de los hombres pasó de 79.1 a 80.9 %, (un aumento de 2 puntos porcentuales). Sin embargo, a pesar de la reducción de la brecha de género, la participación laboral de los hombres es cerca de 14 puntos porcentuales mayor que la de las mujeres; (participación laboral de 67.2 % frente a 80.9 %). Asimismo, existe una brecha salarial: a 2020, se estima que una mujer percibe el 73 % de los ingresos que percibiría un hombre por el mismo trabajo realizado (CEPB, 2021), a pesar de que la evidencia empírica demuestra que una mayor participación laboral de las mujeres contribuye a incrementar los niveles de productividad (Koyuncu et al. 2016; Akbulut, 2011).

En Bolivia y en la región, los cuidados de las personas (ancianos, enfermos, niños) y el trabajo doméstico recaen principalmente en las mujeres mayores de 15 años, lo que las desmotiva de buscar empleo (OIT, 2022d). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que este trabajo —en general no remunerado— ocupa entre el 20 y el 33 % del tiempo diario o semanal de las mujeres, mientras que, en el caso de los hombres, solo cerca del 10 % (Cepal, 2018). Por ello es necesario implementar políticas que promuevan una mayor inclusión laboral de las mujeres y reduzcan estas situaciones de inequidad.

Figura 2.3.2

Proporción de mujeres en posiciones de gerencia

Porcentaje



Fuente: Ilostat

Si bien la participación laboral femenina en Bolivia ha crecido en las últimas dos décadas, la proporción de mujeres en puestos de gerencia se ha mantenido estancada: en el año 2000, el 38.6 % de las mujeres ocupadas ostentaban cargos de gerencia, mientras que a 2021 esta cifra bajó a 35.2 %. Tal comportamiento ha llevado al país a situarse por debajo del promedio regional en este indicador: 1.7 puntos porcentuales detrás de Latinoamérica y el Caribe y 2.6 puntos porcentuales detrás de la OCDE.

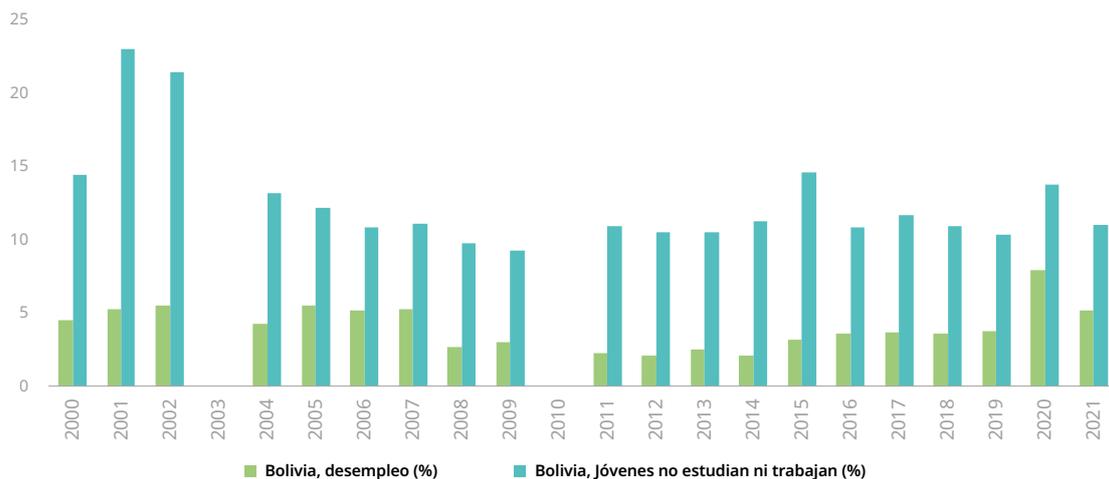
Así como la participación laboral femenina ejerce un efecto positivo en la productividad de las economías, también es importante que las mujeres ocupen cargos de gerencia, ya que aportan habilidades y perspectivas al ambiente laboral que complementan el trabajo de los hombres. En efecto, una fuerza laboral distribuida de manera más equitativa conduce a un mayor crecimiento de la productividad por la incorporación de estilos de gerencia que tienden a incrementar los niveles de hospitalidad, profesionalismo, eficiencia y motivación (Wu y Cheng, 2016). Las mujeres en cargos directivos (CEO) pagan salarios que se corresponden mejor con los niveles de productividad de los trabajadores y promueven la mentoría, lo que se traduce en un mejor desempeño de las compañías (Flabbi et al., 2019). Por ello resulta esencial asegurar una distribución equitativa de los roles en el mercado laboral.

Al estudiarse la otra cara de la moneda, el desempleo, se observa un incremento en las últimas dos décadas: en el año 2000, el desempleo era de 4.5 %, y llegó a reducirse considerablemente hasta el orden del 2 % en 2014; sin embargo, después de la pandemia de la Covid-19 se vislumbra un repunte en este indicador, que se coloca en 5.1 %. A pesar de este incremento, Bolivia permanece como uno de los países de la región con menor tasa de desempleo: 4 puntos porcentuales debajo de sus pares, cuya tasa en 2021 fue de 9.2 %.

Figura 2.3.3

Desempleo total y proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan

Porcentaje



Fuente: Ilostat

Una tendencia que hay que analizar es la participación laboral de los jóvenes. Bolivia es un país con una población eminentemente joven: en 2022, el 89 % de la población era menor de 60 años edad, mientras que el 19 % se encontraba en el rango de 15 a 24 años (INE, 2020). Cuando se analiza el empleo de este último grupo, se observa que un 11 % de los jóvenes no estudia ni trabaja; es decir, 1 de cada 10. Al contrastarse este dato con los niveles de desempleo joven en América Latina, la cifra pudiera parecer menor, ya que la tasa de desempleo llega a 21.9 % en la región (cerca del doble de la de Bolivia). Sin embargo, es importante tener en cuenta la brecha entre el desempleo total de Bolivia y el de su población joven, que lo duplica (11 % frente a 5.1 %), lo que sugiere dificultades para la inclusión de este subgrupo de edad.

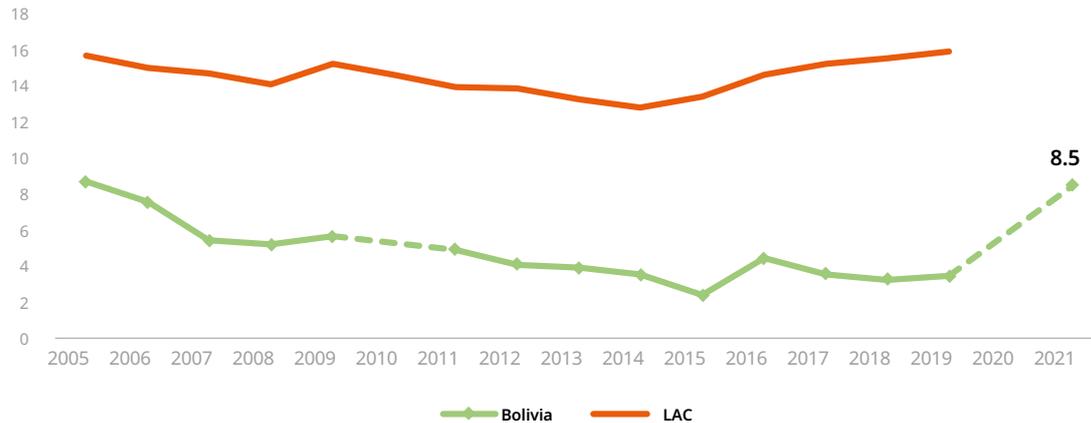
Al igual que con el empleo de la mujer, la entrada de jóvenes calificados al mercado laboral impacta positivamente en la productividad. En adición, el empleo joven produce efectos económicos y sociales

favorables tales como la integración social, el fomento de la ciudadanía y la estabilidad política, y la reducción de la pobreza (Dietrich, 2012; Azeng y Yogo, 2013).

Figura 2.3.4

Subempleo

Porcentaje



Fuente: Ilostat. La línea quebrada se refiere al estimado.

A pesar de que el desempleo en Bolivia es bajo comparado con el de la región, una proporción de los empleados se encuentra subempleada. El subempleo graficado se refiere a aquellas personas ocupadas que estarían dispuestas a trabajar más horas, estarían disponibles para trabajar horas adicionales y trabajaron por debajo de la cantidad de horas establecidas en el país. En el año 2021, Bolivia registró una tasa de subempleo del 8.5 %, cifra que se sitúa en un nivel similar al del año 2000 (8.7 %) y fue consecuencia de un repunte a raíz de la pandemia. Previamente a esta, el subempleo registrado fue de 3.5 % en 2019, y llegó a su punto más bajo en la serie en 2015, equivalente a un 2.4 %.

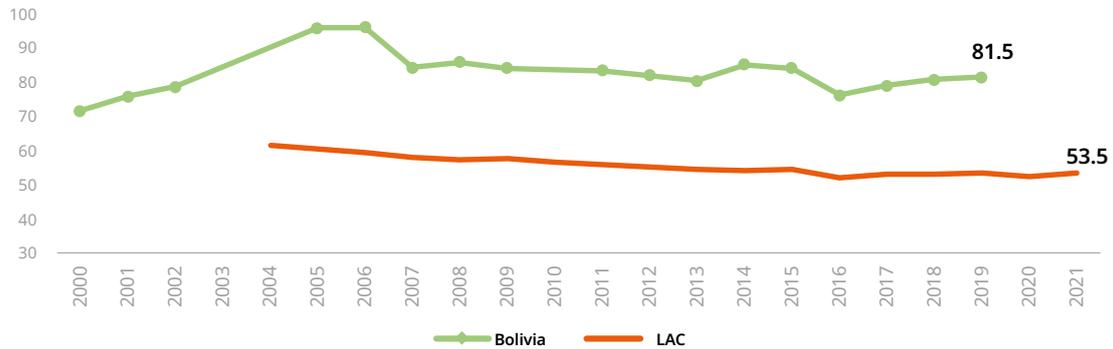
En comparación con Latinoamérica y el Caribe, las cifras del subempleo en Bolivia lucen optimistas, ya que la región duplica el posicionamiento del país andino. Sin embargo, hay quienes estiman que la tasa real de subempleo se ubica entre el 20 y el 50 %, y que afecta principalmente a las mujeres y las personas jóvenes (La Empresa, 2019). Dado que la informalidad en el país se calcula en cerca del 80 %, la verdadera situación de indicadores como el subempleo puede esconderse bajo la categorización de la informalidad.

2.4. Transición para salir de la informalidad

Con la Recomendación nro. 204, la OIT busca que los Estados miembros se enfoquen en facilitar la transición para salir de la informalidad, crear nuevos trabajos formales y prevenir mayor informalidad (OIT, 2015). De acuerdo con el estudio de la CEPB referido anteriormente, en Bolivia la informalidad ha ido creciendo en las dos últimas décadas, y se manifiesta en unidades de producción que no proveen seguro a sus empleados, no cumplen sus obligaciones tributarias o declaran parcialmente sus operaciones (CEPB-OIT, 2021).

Figura 2.4.1

Proporción de trabajo informal a empleo total



Fuente: Ilostat y Cepal. Promedio simple para Latinoamérica y el Caribe reportado por Cepal.

A pesar de presentar una tasa de ocupación superior a la de la región y tasas de desempleo inferiores, la alta incidencia de la informalidad resta calidad a los empleos bolivianos. La región latinoamericana y caribeña es una de las más afectadas por la informalidad a nivel mundial, y, dentro de esta, la economía boliviana ocupa un lugar destacado: en efecto, los niveles de informalidad en Bolivia se han deteriorado en las últimas dos décadas, pasando de 71.6 % en el año 2000 a 81.5 % en 2019. Este posicionamiento llevó al país a superar a la región por 28 puntos porcentuales, la cual en sí presenta una alta tasa de informalidad (53.6 %).

La informalidad resulta más apremiante en los grupos vulnerables, es decir, entre las mujeres, jóvenes, personas con bajo nivel educativo y aquellas que residen en zonas rurales. En el caso de las mujeres, la informalidad se sitúa en 83.2 %, lo que las afecta ligeramente más que a los hombres (80 %) y supera el nivel de informalidad a nivel nacional (81.5 %). En cuanto a la población joven, el panorama es más grave: este grupo presenta una tasa de informalidad del 94 %, que, sumada a la tasa de desempleo de los jóvenes que es de 11 %, supone trabas significativas para su desarrollo e incorporación en la economía como entes productivos.

El nivel educativo es otra de las variables que afecta la propensión a la informalidad de los trabajadores. En efecto, aquellos que exhiben nivel educativo avanzado presentan una tasa de informalidad de 53.1 %, considerablemente inferior a la de aquellos con educación básica (92 %) o secundaria (81.5 %). Sin embargo, incluso contar con un nivel educativo avanzado posiciona a los trabajadores del país en una situación similar a la del resto de los trabajadores de la región, quienes, indistintamente de su nivel educativo, alcanzan una informalidad del 53.3 %, ligeramente por encima de aquellos con estudios avanzados en Bolivia. La ruralidad también supone mayor informalidad: mientras que la informalidad urbana es de 76 %, la rural se sitúa en 92.1 %, 16 puntos porcentuales por encima de la urbana y 11 puntos porcentuales superior al promedio nacional.

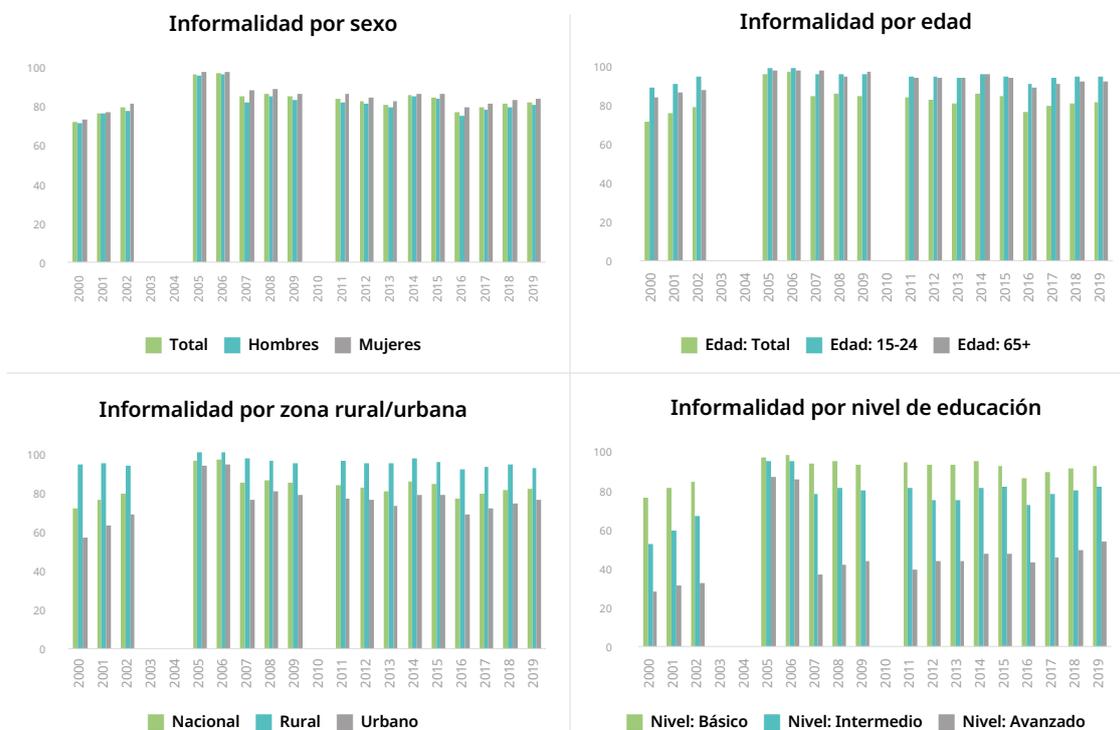
Desde el punto de vista de los trabajadores, la informalidad los expone a condiciones de trabajo inadecuadas e inseguras, carecen de oportunidades de capacitación, sus ingresos suelen ser más inciertos, no cuentan con protección social y se encuentran al margen de la legislación laboral (Ulysea, 2020; Masello, 2021; La Porta y Shleifer, 2014; OIT, 2018). Por tanto, abordar la informalidad laboral no solo constituye un mecanismo para fomentar la productividad, sino también el desarrollo, la cohesión social y la reducción de la pobreza.

La informalidad puede ejercer efectos negativos en la productividad de las empresas y en las economías. En cuanto a las empresas, les dificulta el acceso a capital, la adopción de tecnología, la inversión en expansión del negocio y la participación en mercados internacionales (Ulysea, 2020; Loayza, 2010). Por otro lado, la informalidad puede también implicar una cultura de evasión fiscal, incumplimiento legal e ineficiencia en los procesos productivos (Ulysea, 2018; Loayza, 2018).

No obstante lo dicho, la realidad de la informalidad y sus efectos en las empresas y el crecimiento económico es variada: dentro de las firmas informales existen pequeñas unidades de subsistencia con dificultades para operar formalmente, empresas con potencial productivo pero a las que les resulta difícil formalizarse por las cargas regulatorias, y otras eligen permanecer en la informalidad para aprovechar y evadir costos (Fernández, 2022; Ulyssea, 2018; Loayza, 2018). Algunos autores han encontrado evidencia empírica de la prevalencia de estos tres tipos de firmas informales en la región: Fernández (2022) en Colombia y Ulyssea (2018) en Brasil. Las empresas, a su vez, si bien pueden ser formales en sus registros, en ocasiones contratan empleados fuera de las vías formales, lo que se contrapone con la meta de reducir la informalidad laboral. Al desarrollar políticas públicas y acciones para combatir la informalidad de las unidades económicas, se deben tener en cuenta estas realidades y complejidades.

Figuras 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5

Proporción de trabajo informal a empleo total por sexo, edad, zona rural-urbana y nivel de educación



Fuente: Ilostat

2.5. Emprendimiento e innovación

Los emprendimientos constituyen una parte vital del desarrollo y la productividad de un país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo existen los de oportunidad, sino también emprendimientos de necesidad, que se dan cuando las personas se ven obligadas a iniciar un negocio debido a la falta de empleos decentes en sus economías. En general, este tipo de emprendimientos está asociado con la economía informal y una productividad menor (OIT, 2013; La Porta y Shleifer, 2014).

El concepto de emprendimiento está estrechamente vinculado con el de innovación. El emprendimiento es un proceso que consiste en convertir ideas en productos o servicios para luego constituir una empresa que los haga disponibles en el mercado (Alemany et al., 2021; Johnson, 2001); y, por su parte, el proceso de innovación va de la mano del crecimiento económico y también del emprendimiento, puesto que los emprendedores buscan oportunidades que explotar a través de las innovaciones (Schumpeter, 1934; Drucker, 2006).

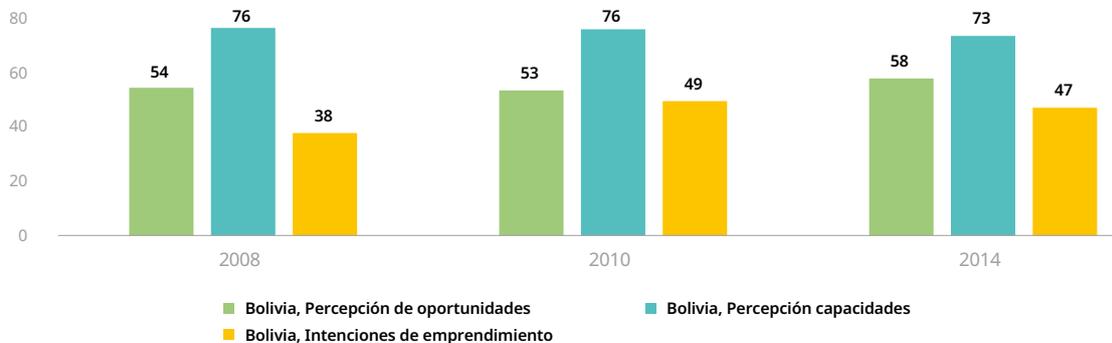
En esta sección se utiliza el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para analizar el estado del emprendimiento en Bolivia, estudio que se publica desde 1999 y que evalúa tanto el emprendimiento como sus ecosistemas. Su objetivo es proveer herramientas a los hacedores de políticas para fomentar el emprendimiento como motor del desarrollo, y se alimenta de una encuesta que se aplica a los emprendedores del país en cuestión. Bolivia no siempre ha participado en este estudio, y su último GEM disponible es de 2014.

Para el caso de Bolivia, el GEM considera tres componentes: en primer lugar, la percepción de oportunidades. Al respecto, en 2014 el 57.7 % de los entrevistados afirmó que en el país existen oportunidades para empezar un negocio en el área en que residen. Este indicador presentó una mejora respecto al valor de 2008, cuando el 54 % de los entrevistados opinó lo mismo. El segundo componente, percepción de capacidades, experimentó un leve retroceso en el periodo de estudio disponible, aunque permanece como el de mejor desempeño para Bolivia: pasó de 76.2 % de los entrevistados que afirmaba poseer las capacidades y habilidades para empezar un negocio, a 73.1 % en 2014. El tercer componente, intenciones de emprendimiento, mejoró en comparación con 2008, aunque respecto a la medición del año 2010 sufrió un retroceso. En este sentido, la proporción de emprendedores que señaló que tiene intenciones de comenzar un negocio en los próximos tres años se incrementó de 37.5 % en 2008 a 46.9 % en 2014.

Figura 2.5.1

Indicadores de emprendimiento

Porcentaje de entrevistados-GEM



Fuente: GEM

La falta de datos más recientes dificulta entender la situación actual de Bolivia y sus emprendimientos. Sin embargo, un mapeo del ecosistema de tecnología digital realizado desde 2019 permite conocer el estado de los emprendimientos en este sector de alta incidencia. Así, el estudio reporta que el nivel de startups en tecnología digital se ha mantenido relativamente estable luego de la pandemia, aunque un 62 % afirmó que no pudo generar flujos satisfactorios durante 2020. Las tasas de nacimiento y muerte de estos emprendimientos se mantienen cercanas (78 y 76 %, respectivamente) a 2021. A su vez, se encuentran concentrados en las ciudades con mayor densidad poblacional: Santa Cruz representa el 54 % de ellos y la Paz, el 30 %. Asimismo, son liderados por jóvenes, de los cuales solo un tercio es mayor

de 30 años; una de cada tres personas emprendedoras es mujer; un 67.6 % tiene menos de dos años de antigüedad; y, a 2021, el promedio de personas que trabajaban en ellos era 6 (Mapeo TIC Bolivia). Aunque tradicionalmente el sector Tecnología ostenta una cultura de emprendimiento más acelerada que la de otros sectores, este mapeo permite apreciar su concentración urbana, afinidad con los jóvenes y necesidad de mayor equidad de género en los emprendimientos bolivianos.

La teoría moderna de crecimiento económico, específicamente el modelo de Solow-Swan, describe tres determinantes principales del crecimiento: el capital físico, el capital humano y los aumentos en la productividad por medio de la innovación o cambios tecnológicos. Asimismo, la evidencia empírica demuestra que la innovación ejerce efectos positivos en la productividad de los países (OIT, 2020). Por su parte, Crespi y Zuniga (2012) afirman que la innovación en las firmas eleva sus niveles de productividad en el contexto latinoamericano: sobre la base de la evidencia de seis países, encuentran que las firmas que invierten en conocimiento son más propensas a producir nuevos avances tecnológicos, y las que innovan obtienen mayor productividad laboral que aquellas que no lo hacen.

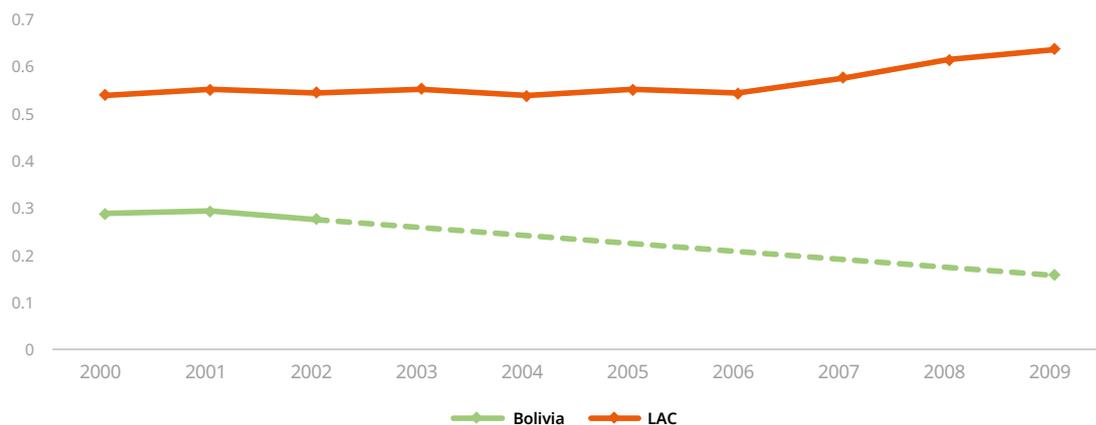
La innovación es un proceso de creación e implementación de nuevas ideas, tecnologías y técnicas para mejorar los procesos productivos (Taylor, 2017). En este sentido, se puede traducir en cambios en los procesos de un negocio, creación de nuevos métodos de producción o productos, o adaptación de tecnologías y técnicas existentes. Algunas de las variables o indicadores que se utilizan para medir la innovación son la cantidad de patentes activas o concedidas en una economía así como la inversión en investigación y desarrollo (I+D), regularmente expresadas en relación con el PIB.

En esta sección se evalúa la inversión en I+D como proxy de innovación. La serie de datos disponible, que comprende el periodo 2000-2009, ilustra cómo la inversión en I+D de Bolivia fue decayendo: mientras que en el año 2000 se ubicaba en 0.29 % del PIB, para 2009 se había reducido a la mitad, 0.15 %. Este desempeño contrasta con el de América Latina y el Caribe, que en el mismo periodo vio su inversión en I+D incrementarse de 0.54 % en el año 2000 a 0.64 % en 2009. Hay que considerar que en el año 2009 la OCDE registró una inversión en I+D equivalente a 2.32 % del PIB. Estimaciones más recientes de algunos autores colocan la inversión en este rubro en Bolivia cercana al 0.17 % del PIB, aún por debajo del promedio de la región (De la Cruz, 2021).

Figura 2.5.2

Inversión en investigación y desarrollo (I+D)

Porcentaje del PIB



Fuente: Unesco. Las líneas quebradas significan un estimado lineal hasta el próximo valor.

La información sugiere que, para colocarse en la frontera del conocimiento y motivar el incremento de la productividad por la vía de la innovación, Bolivia todavía tiene importantes inversiones que realizar. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), para 2009 el Gobierno fue responsable de cerca del 50 % de la inversión en I+D del país, seguido por las instituciones de educación superior, con cerca del 27 %; las empresas, con cerca del 4 %; y las organizaciones sin fines de lucro, con 1 a 2% (Unesco, 2020). Cerca de un 15 % no pudo ser clasificado. Al no existir información más actualizada, se hace difícil conocer la evolución de este indicador a un periodo más actual.

La baja participación del sector privado en procesos de innovación limita la capacidad productiva del país. Según la Encuesta de Unidades Económicas de 2016 que realizó el Ministerio de Desarrollo Económico y Plural, de los tres sectores evaluados (Servicios, Comercio y Manufactura) el más innovador fue el de Servicios, en el que apenas un 8 % de las empresas reportaba haber realizado alguna innovación tecnológica (CEPB, 2021). Los resultados fueron bastante dispares entre empresas grandes (27 %) y microempresas (7 %), lo que evidencia la necesidad de habilitar mecanismos para que los negocios de menor tamaño —que son la mayoría y se encuentran más ampliamente distribuidos en el tejido nacional— sean apoyados en procesos innovadores para impulsar su productividad.

La tecnología de punta y las mejoras tecnológicas han sido identificadas en los modelos de crecimiento económico (por ejemplo, el modelo Solow-Swan) como una parte esencial del crecimiento de la productividad total de los factores (PTF). Muchas veces las mejoras tecnológicas son consideradas el principal factor explicativo del crecimiento de la PTF, y se suele hablar de cuán cerca se encuentra una economía de la frontera tecnológica (Moss et al., 2020). El índice de preparación para tecnologías de frontera calculado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) clasifica a las economías según su capacidad de utilizar, adoptar y adaptar tecnologías de frontera⁸ de manera equitativa. Este índice se compone de cinco áreas: infraestructura TIC (tecnología de la información y las comunicaciones), habilidades para la adopción tecnológica, I+D, actividad industrial y acceso a financiación. Los primeros tres componentes están relacionados con las capacidades internas de los países; por su parte, el componente de actividad industrial incluye las actividades relacionadas con la adopción o adaptación tecnológica, tales como manufactura, finanzas, TIC y manufactura de tecnología (Naciones Unidas, 2021). Finalmente, el quinto componente evalúa el financiamiento como mecanismo para innovar. Una puntuación de 0 en el índice supone el peor desempeño.

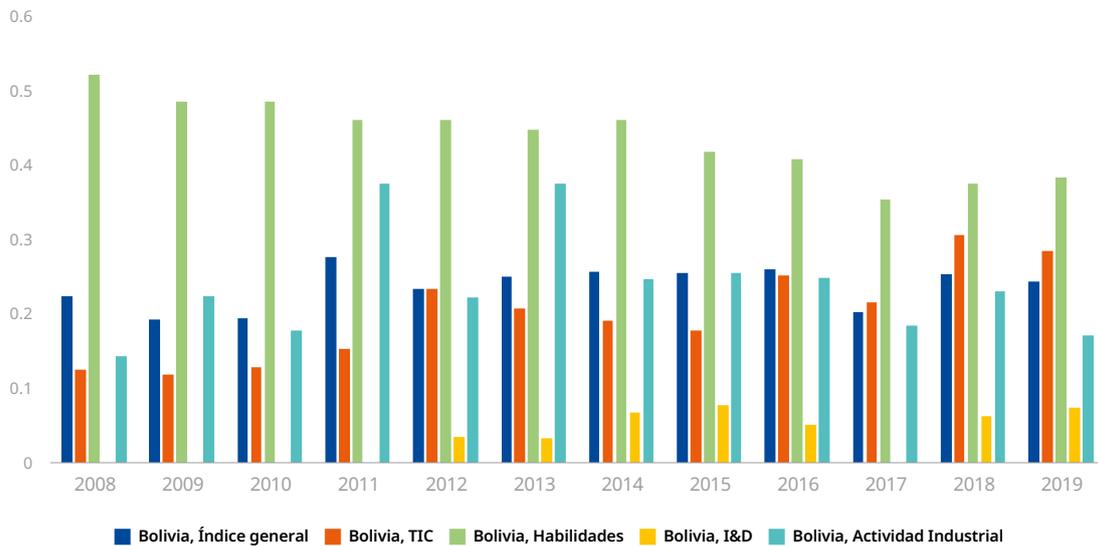
Entre 2008 y 2019, Bolivia ha experimentado ligeras mejoras en su capacidad para adoptar tecnologías de frontera: en efecto, el índice en cuestión pasó de 0.22 a 0.24 en este periodo. La categoría de peor desempeño es la de inversión en I+D, con un puntaje de 0.07 en el índice de 2019, seguida por la actividad industrial, con 0.17 puntos. Estos puntajes reflejan los bajos niveles de inversión en I+D en Bolivia, y también la estructura de su economía poco diversificada y orientada a la realización de actividades en el sector primario. En cuanto a la infraestructura TIC, se han presentado mejoras: pasó de 0.12 en 2008 a 0.28 en 2019.

Cuando se contrasta la situación de Bolivia en este indicador con la de otras latitudes, se ponen de manifiesto las dificultades de este país para la adopción y adaptación tecnológicas: el promedio de América Latina y el Caribe se situó en 0.37 en 2021, superior al 0.24 de Bolivia; mientras que el promedio de las regiones referentes en la materia, como América del Norte y Europa del Este, alcanzó un puntaje de 0.90 y 0.94, respectivamente (Freire, 2021).

⁸ Las tecnologías de frontera son aquellas nuevas y de rápido desarrollo que aprovechan la digitalización y la conectividad. Las Naciones Unidas considera once tecnologías de frontera en su índice de preparación para tecnologías de frontera: inteligencia artificial, internet de las cosas, impresión 3D, *big data*, *blockchain*, 5G, robótica, drones, edición de genes, nanotecnología y tecnología solar fotovoltaica (Naciones Unidas, 2021).

Figura 2.5.3

Índice de preparación para la tecnología de punta Máximo 1



Fuente: Adaptado del Frontier Technology Index de Unctad, índice calculado de 2008 a 2019. No se presenta el subcomponente "acceso financiero", que se desarrolla en el siguiente apartado.

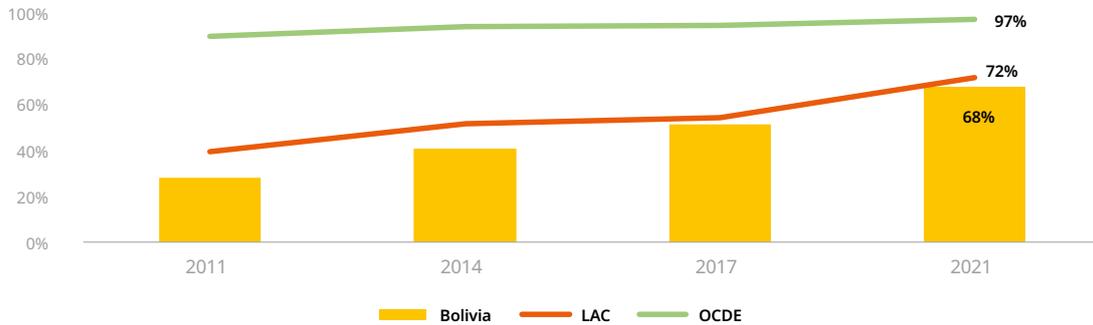
2.6. Acceso al crédito y a servicios financieros

El acceso al financiamiento es crucial para el crecimiento de las empresas y, consecuentemente, el aumento de la productividad. Una investigación realizada por la Universidad de Stanford en colaboración con el Banco Mundial encuentra evidencias de que la falta de acceso al crédito es una de las principales barreras para la productividad de las pymes (Bloom et al., 2010). Según Butler y Cornaggia (2011), un análisis de doce estados de los Estados Unidos mostró que la producción aumenta más en aquellos con mayor acceso a las finanzas. Por otro lado, Giang et al. (2019) probaron que las empresas que acceden a préstamos bancarios observan mejoras de 8.6 a 9 % en su productividad (medida a través de la PTF).

Una de las variables que se utiliza para apreciar el acceso al financiamiento en una economía es la posesión de una cuenta bancaria. En Bolivia, la población mayor de 15 años que posee una cuenta en alguna institución financiera se ha más que duplicado desde 2011, ya que ha pasado de 28 a 68 % en 2021. Este desempeño llevó a que Bolivia acortase su brecha con el promedio regional, que en 2001 solía ser de 11 puntos porcentuales y hoy es solo de 4, lo que sitúa a la región con un 72 % de tenedores de cuentas bancarias entre su población mayor de 15 años en 2021. De acuerdo con las estimaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a mayo de 2023 un 7.82 % de los habitantes contaba con una cobertura baja de servicios financieros; y 1.7 %, nula. A nivel de municipios, 17.1 % se posicionaba como de baja cobertura y 15.04 % como de nula (ASFI, 2023a).

Figura 2.6.1

Cuenta en institución financiera
Porcentaje de edad 15+



Fuente: Banco Mundial, Global Findex Database.

La adquisición de préstamos es otro indicador que permite dimensionar el acceso al crédito y a los servicios financieros. El nivel de uso del crédito, que se ubica por debajo del promedio regional, se ve reflejado en el reducido número de solicitudes de préstamos a bancos comerciales presentadas en Bolivia: en 2021, apenas 81 de cada 1000 personas solicitaban préstamos, cifra equivalente al 8.1 %. No obstante, se ha visto un incremento en el número de solicitantes de préstamos desde 2004, cuando apenas 23 de cada 1000 habitantes acudían a los bancos comerciales para estos fines. A pesar de este incremento, la brecha que exhibe Bolivia frente al desempeño regional es significativa: aunque las solicitudes de préstamos en la región pasaron de ser 5.3 a 3.2 veces superiores que las de Bolivia entre 2004 y 2021, todavía existe una diferencia importante entre ambas.

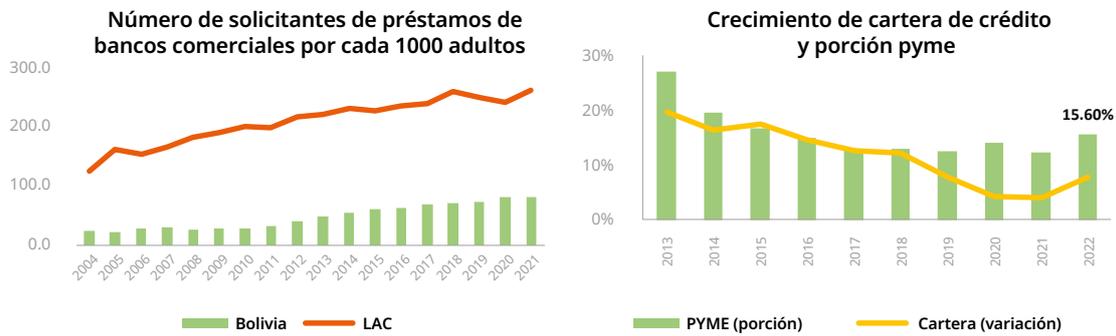
A nivel de cartera de créditos, en marzo de 2023 las pymes representaban el 12.1 %; el segmento empresarial, el 22.4 %; los préstamos para vivienda, el 25.6 %; el consumo, 9.8 %; y los microcréditos, 30 %. (ASFI, 2023b). Se observa que el crecimiento de la cartera de créditos se ha desacelerado y que la porción correspondiente a las pymes ha ido disminuyendo: mientras que en 2013 representaba un 27 %, a marzo de 2023 solo llegaba al 12.1 %. Aunque el valor absoluto del crédito a las pymes ha aumentado, su rol en el monto total ha disminuido. Así, de los créditos otorgados a las unidades productivas, las medianas empresas representan cerca del 44.8 %; las grandes empresas, 27.1 %; las pequeñas empresas, 19.4 %; y las microempresas, un 8.7 % (ASFI, 2023b).

En este aspecto, hay que considerar que el Estado boliviano ejerce controles sobre las tasas de interés y los niveles mínimos de crédito. En efecto, como parte de su política financiera el Gobierno busca priorizar la demanda de servicios financieros de sectores productivos como las micro, pequeñas y medianas empresas, e, igualmente, el financiamiento para vivienda social. Para el sector productivo, el mínimo de la cartera total de créditos por los bancos múltiples es de 25 %⁹ (Decreto nro. 4408). A su vez, los Bancos Pyme deben mantener un nivel mínimo de 50 %, aunque existe flexibilidad en el tipo de préstamo considerado.

⁹ La ASFI usa la figura del 60 %, que incluye sector productivo y vivienda social. En el decreto citado se especifica que un mínimo de 25 % debe dirigirse al sector productivo.

Figuras 2.6.2 y 2.6.3

Solicitantes de préstamos y Crecimiento de la cartera de crédito



Fuente: FMI, Encuesta de Acceso Financiero; y ASFI, Estadísticas del Sistema Financiero.

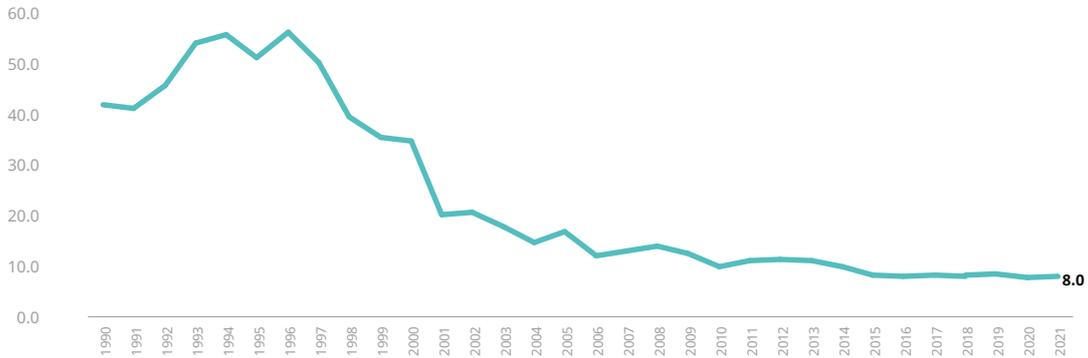
Según una encuesta realizada por la ASFI a 30 000 personas en 2021, las principales barreras para acceder al crédito en Bolivia son no cumplir con los requisitos mínimos relacionados con capacidad de pago y garantías (31 %); que las entidades exijan mayores requisitos (27 %); tasas o condiciones no favorables (20 %); y la preferencia por préstamos de familiares y amigos (15 %). Asimismo, el 68 % de los encuestados indicó que los requisitos documentales que solicitan las entidades son difíciles de cumplir (ASFI, 2021).

Si bien el acceso al crédito ejerce un efecto positivo en la productividad, existen factores que actúan como catalizadores de tal efecto, por ejemplo la tasa de interés. Así, se ha demostrado que la tasa de interés incide en la productividad de los países y puede afectar el acceso y la distribución de los recursos (Cette et al., 2016), y que las pequeñas empresas tienen que pagar hasta 20 veces más que las grandes para obtener financiamiento (McKinsey, 2015). Además, Lopez-Salido et al. (2021) explican cómo las tasas de interés inciden en la productividad a través de la innovación: las tasas de interés bajas brindan a los tecnológicamente rezagados la oportunidad de innovar, lo que, a su vez, conduce a una mayor productividad, competencia y crecimiento del mercado.

Cuando se analizan las tasas de interés activas en Bolivia (aquellas que las entidades financieras cobran por los créditos o préstamos otorgados), se observa que han experimentado una baja considerable en las últimas dos décadas, en que se han reducido de niveles insostenibles (superiores al 40 %) hasta un 8 % en 2021. En parte, estas bajas tasas de interés se deben al control de tasas: en 2021, la tasa máxima de interés para las microempresas era de 11.5 %; para la pequeña empresa, de 7 %; y para la mediana y gran empresa, de 6 % (Asociación de Bancos Privados de Bolivia, Asoban). No obstante, es posible que las barreras de acceso al crédito para ciertos grupos estén limitando el aprovechamiento de tasas de interés favorables a pesar de un crecimiento de la cartera total. Además, puede existir un efecto limitante dada la existencia de techos de tasas, los que pueden resultar en menor acceso e inclusión financiera para los pequeños prestatarios y aquellos en zonas remotas, así como menor transparencia bancaria y cargos ocultos (Heng et al., 2021; Calice, Díaz y Masetti, 2020).

Figura 2.6.4

Tasa de interés activa



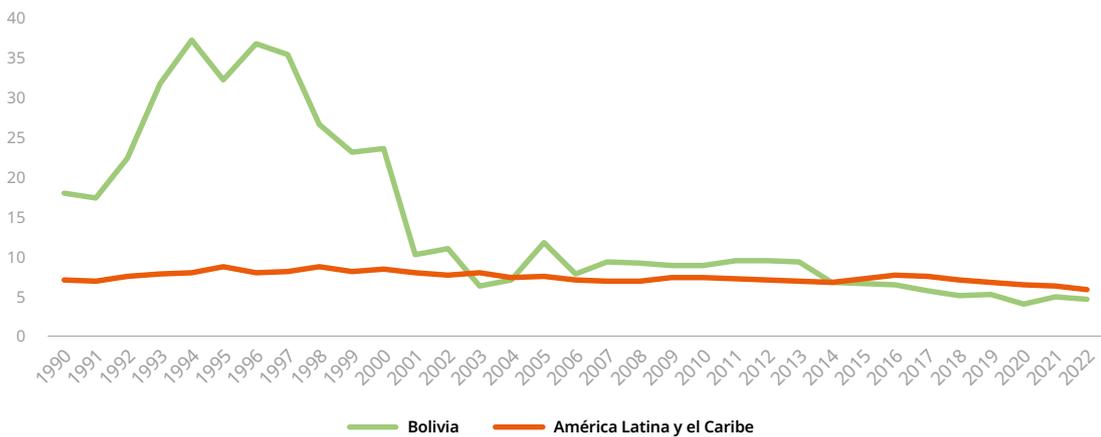
Fuente: Banco Mundial

Un factor clave que debe considerarse cuando se analizan las tasas de interés es el spread bancario o diferencial entre tasas de interés activas y pasivas. Las tasas pasivas son aquellas que pagan las entidades financieras por los depósitos a la vista, a plazo o de ahorro. La década del noventa fue una de inestabilidad económica para Bolivia y así lo sugiere el diferencial entre las tasas, que superó de forma marcada al diferencial de la región: en el periodo 1990-2000, el diferencial promedio en Latinoamérica y el Caribe fue de 7.9 %, mientras que en Bolivia fue de 27.6 %, cerca de 4 veces la media regional. A partir de 2001 el diferencial empieza a estabilizarse y situarse a la par de los niveles de la región: un promedio de 7.6 % en Bolivia frente a 7.1 % en la región. Destaca que desde 2014 el diferencial ha sido menor que en la región, con un promedio de 5.5 %, 1.8 puntos porcentuales inferior. Este bajo diferencial reduce los costos relativos de acceder a créditos, lo que hace más atractivo invertir en actividades productivas.

Figura 2.6.5

Diferencia entre tasas activa y pasiva

Porcentaje



Fuente: Banco Mundial

2.7. Infraestructura física y digital, y conectividad con mercados internacionales

Se ha demostrado que las existencias de capital físico de un país contribuyen a elevar su productividad (Duggal et al., 1999; Bhatta y Drennan, 2003). Sin embargo, la magnitud de esta relación entre infraestructura y productividad puede variar en función del contexto del país, el tipo de infraestructura y su nivel de calidad, y la forma en que se mide la relación (Deng, 2013).

La evidencia empírica demuestra que la inversión en Bolivia conduce a mayores niveles de crecimiento. De acuerdo con las estimaciones de la CEPB y la OIT que toman como parámetro el sector Construcción y utilizan datos de 1980-2016, la inversión en infraestructura pública y privada genera un efecto positivo en el crecimiento, con coeficientes del 0.74 y 0.45, respectivamente (CEPB-OIT, 2021). También se halló que, en el largo plazo, estas inversiones son complementarias y que presentan una elasticidad de 1.3, lo que sugiere que por cada USD 130 millones de inversión pública se generan USD 100 millones de inversión privada (CEPB-OIT, 2021). En contraste, en el corto plazo la inversión pública desplaza a la privada, que disminuye en 40 por cada 100 puntos que aumenta la primera (CEPB-OIT, 2021). Lo anterior sugiere un efecto de crowding out de la inversión privada en el corto plazo que debe ser mitigado si se busca que el país se encamine a impulsar inversiones que, en el largo plazo, fomenten la productividad.

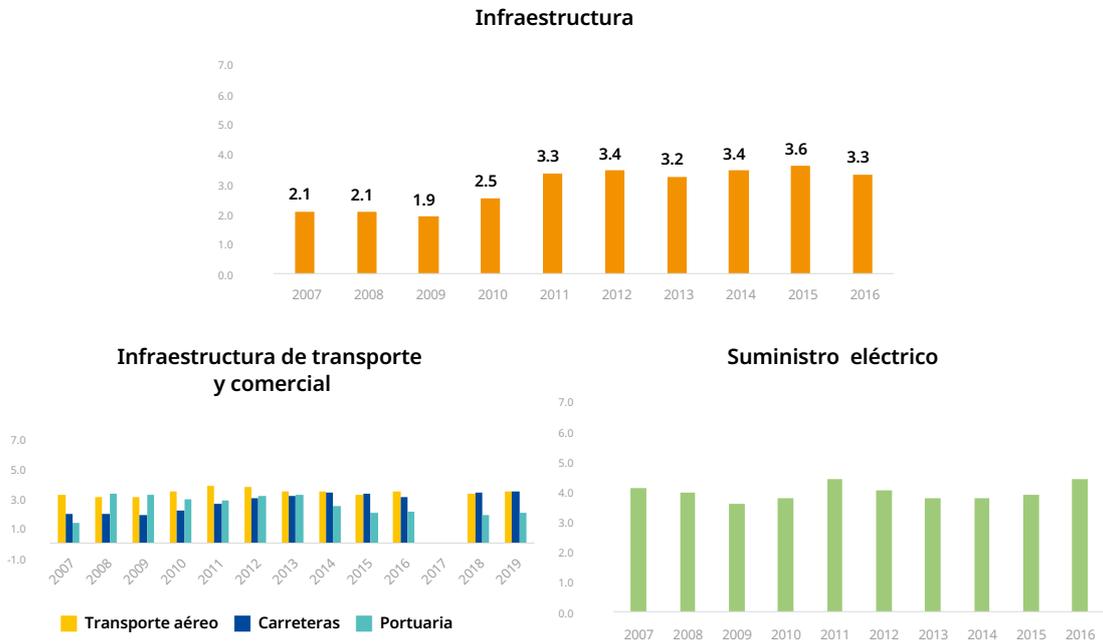
De acuerdo con los estudios realizados por el BID, América Latina presenta una brecha importante en materia de infraestructura. Para reducirla y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030, la región tendrá que incrementar su inversión en este rubro en un 70 % hasta llegar al 3.12 % anual del PIB (Brichetti et al., 2021). En 2019, Bolivia era el tercer país de la región con mayor brecha en infraestructura: 134.2 % como porcentaje del PIB, proporción equivalente a USD 55 273 millones, de los cuales el 41.4 % estaba relacionado con deficiencias en la calidad, es decir, mantenimiento y reemplazo (Brichetti et al., 2021). En esta sección se aborda el tema de la calidad de la infraestructura como mecanismo para elevar la productividad.

Para analizar la calidad de la infraestructura en Bolivia, se toma como referencia el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, que indaga sobre la percepción de la calidad de la infraestructura entre ejecutivos de negocios de todo el mundo y se realiza una comparación entre países. Así, en lo que respecta a la calidad total de la infraestructura —que abarca transporte terrestre, aéreo y portuario, así como suministro eléctrico e infraestructura digital—, Bolivia alcanza una de las puntuaciones más bajas de la región y del mundo: en 2016, último dato disponible de la serie total, el país obtuvo una puntuación de 3.3 de 7, donde 1 sugiere que la infraestructura está subdesarrollada y 7, que es extensiva y eficiente. Así, Bolivia se situó por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe analizados, que fue de 3.7. En el ranking del índice de competitividad global de 2019¹⁰, el país ocupó el puesto 122 de 141 países en el pilar de infraestructura, desempeño que, aunque bajo, representa un progreso importante respecto a hace una década (no obstante lo cual Bolivia se coloca por debajo de otros países de la región).

10 Para su edición de 2018, el Foro Económico Mundial cambió la metodología de su índice de competitividad global (ICG), lo que no hace comparables algunas series. Así, se presentan hasta 2016 algunas de ellas por su valor histórico y se describen los resultados de 2018 y 2019, último año publicado del ICG. En 2017 Bolivia no fue incluido en este índice por falta de datos.

Figura 2.7.1

Percepción de la calidad de la infraestructura y suministro eléctrico¹¹
1-7 (mejor)



Fuente: Foro Económico Mundial, índice de competitividad global.

Cuando se evalúan las categorías que componen este índice, se aprecia el peor desempeño en la infraestructura asociada a transporte: aquella que abarca la calidad de las vías terrestres (carreteras, caminos, avenidas), vías férreas, aeropuertos y puertos marítimos. El desempeño medido por el índice de competitividad global es consistente con la brecha de infraestructura proyectada para el país. Bolivia exhibe su mayor brecha en Transporte, categoría que concentra el 56 % de sus deficiencias (Brichetti et al., 2021): solo el 16 % de la infraestructura vial está asfaltada o pavimentada, a pesar de su expansión de 57 963 kilómetros en 2001 a 189 850 kilómetros en 2019 (CEPB-OIT, 2021).

La calidad del suministro eléctrico es otro de los componentes de infraestructura claves para el desarrollo productivo de las naciones. Existe una relación positiva entre el crecimiento de la productividad de un sector y los cambios técnicos y en precios de los insumos de producción, incluyendo la energía eléctrica (National Research Council, 1986). En particular, una mayor electrificación y uso de medios para producir energía —como son el petróleo y el gas natural— generan incrementos en la producción nacional y la productividad (Schur et al., 1979).

El indicador de calidad del suministro eléctrico evalúa cuán confiable es la provisión de energía eléctrica en un país, ya que busca conocer en qué medida se dan fluctuaciones de voltaje e interrupciones o ausencia del servicio eléctrico. Entre 2007 y 2016, año hasta el cual existen datos disponibles para este indicador, Bolivia registró una mejoría en la calidad del suministro eléctrico, que pasó de 4.1/7 a 4.4/7, desempeño que, si bien la sitúa en una mejor posición frente a sus demás indicadores de infraestructura, la deja por debajo de otros países de América Latina y el Caribe. A 2019 se estimó que el 88.1 % de la población tenía acceso a electricidad, un déficit de 12 %.

¹¹ Para 2018 y 2019 hay un cambio de metodología y se pregunta sobre la eficiencia de los servicios aéreos y portuarios más que por la calidad de la infraestructura; sin embargo, se consideró pertinente agregarlo a las series presentadas por su similitud.

Las deficiencias en la calidad del suministro eléctrico van acompañadas de dificultades para el acceso. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el 12 % de la población boliviana no tiene acceso a energía y, además, existe un alto nivel de desigualdad en dicho acceso: en 2015, la población urbana presentaba una cobertura del 98 % frente a un 66 % de la población rural. Para enfrentar los retos en materia de energía, Bolivia ha lanzado el Plan del Sector Eléctrico del Estado Plurinacional 2025, con el que busca incrementar la cobertura al 100 % a 2025 a través de proyectos de expansión de la generación y transmisión así como del incremento de la participación de la energía hidroeléctrica en la matriz energética (Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, 2014). A su vez, el sector público y las empresas deben aunar esfuerzos para diversificar la matriz energética y facilitar la adopción de energías renovables que contribuyan a cerrar esta brecha y a la sostenibilidad energética del país. Estas transiciones deben ser justas y aminorar sus efectos entre los trabajadores y las poblaciones que dependen de estas industrias, de alta relevancia en Bolivia. Vale aclarar que en Bolivia el consumo energético que proviene de fuentes renovables se estima en 17,5 % (WEF GCI, 2019).

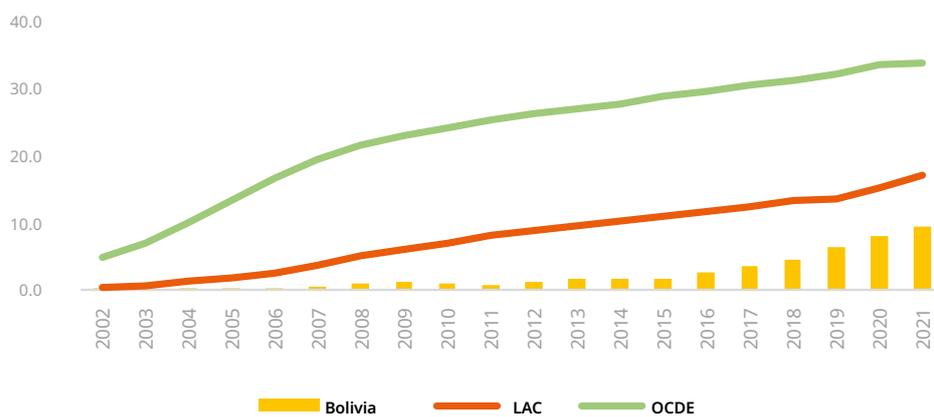
En cuanto a la infraestructura digital, un acceso inadecuado limita el crecimiento y la productividad empresarial. Según un reporte elaborado por la compañía McKinsey, en los países en desarrollo que invierten en su infraestructura digital las empresas suelen tener mayores ingresos que aquellas en contextos de baja inversión en este rubro (McKinsey, 2015). Particularmente, para las pymes tener acceso y usar infraestructura digital brinda numerosos beneficios, tales como aumento de ventas, reducción de costos, optimización de procesos y mayor innovación (OIT, 2021; OIT, 2022c).

En las últimas tres décadas, el internet ha sido un gran propulsor del crecimiento económico y la prosperidad: diversas estimaciones sugieren que contribuye un 3.4 % del PIB en las grandes economías (Manyika y Roxburgh, 2011). Con la creciente digitalización y uso de tecnologías, los procesos productivos han sufrido cambios que se han traducido en mayores niveles de productividad e ingresos, así como en el mayor bienestar social de las naciones, dado que favorecen procesos más eficientes (OIT, 2022c).

Figura 2.7.2

Suscripciones a banda ancha fija

Por cada 100 personas



Fuente: International Telecommunication Union (ITU)

A pesar de la centralidad del internet en los procesos de desarrollo productivo, Bolivia permanece rezagada en su adopción. Entre 2002 y 2021, las suscripciones a banda ancha fija por cada 100 personas pasaron de 0 a 9.3, lo que, si bien representa un crecimiento importante, deja al país detrás de la región:

en 2021, 16.8 de cada 100 habitantes de América Latina y el Caribe poseían suscripción a banda ancha fija, cerca del doble que Bolivia. Cuando se contrasta el caso boliviano con el desempeño de la OCDE, la brecha es más notoria: 33.6 personas de cada 100 poseen una suscripción a internet fijo, más que el triple que la nación andina.

Este indicador también captura las suscripciones de organizaciones y empresas, por lo que puede dar luces sobre la penetración digital para usos comerciales. El costo unitario del acceso a banda ancha puede contribuir a explicar esta baja adopción de internet. En efecto, Bolivia es el cuarto país con el costo unitario más alto de América Latina y el Caribe para brindar este servicio, que asciende a USD 560 por persona (Brichetti et al., 2021).

El Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) evaluó en 2018 el caso de Bolivia y su ecosistema empresarial para la era digital desde el punto de vista de las firmas exportadoras. El reporte encuentra debilidades en términos de certificaciones internacionales para las pequeñas empresas, trabas regulatorias (principalmente licencias y permisos) y bajos niveles de colaboración entre universidades e industrias en I+D, y desarrollo de clústeres. Además, concluye que, aunque existe acceso al crédito, este desempeño está impulsado por las grandes empresas. Como fortalezas, se destaca que las empresas medianas se encuentran cercanas a las grandes en cuanto a su capacidad de adaptarse a la era digital (ITC, 2018).

Es de vital importancia para un país productivo poder llevar los productos y servicios creados por sus industrias y ciudadanos hacia otros mercados. En 2015, McKinsey estimó que las reformas y los acuerdos comerciales realizados entre 2004 y 2014 aumentaron la productividad en 2.8 % por año en las economías en desarrollo¹². La apertura a mercados internacionales favorece la productividad de los países a través de la innovación y la diversificación del riesgo: cuando una firma ingresa al mercado de exportación, registra incrementos de productividad derivados de las transferencias tecnológicas y economías de escala propias del proceso (Schwarzer, 2017). Por otro lado, la diversificación propicia una mejor distribución de los riesgos de inversión, lo que estimula la acumulación de capital y el crecimiento económico (Acemoglu y Zilibotti, 1997). Con respecto a este tema, Crespi y Zuniga (2012) han demostrado que en seis países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay) la exportación ha promovido procesos innovadores que han redundado en una mayor productividad.

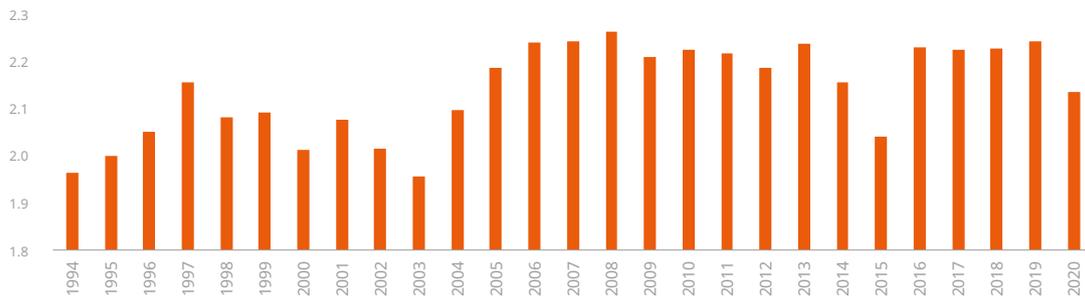
Existen diversos indicadores que permiten medir el nivel de exportación y diversificación de un país. El índice de penetración de las exportaciones del Banco Mundial evalúa el acceso de los países a destinos de exportación, para lo cual mide el alcance de las exportaciones de un producto particular de un país como proporción de los destinos que importan ese producto. Cuando este índice presenta un valor bajo, se infiere que existen barreras que impiden el desarrollo del mercado y la comercialización hacia destinos de exportación.

Según este índice, en los últimos 25 años Bolivia ha permanecido estancada en lo que respecta a destinos de exportaciones: mientras que en 1994 alcanzó una puntuación de 2, en 2020 se situó en 2.1. Lo anterior sugiere, por un lado, que los productos bolivianos no son lo suficientemente competitivos para posicionarse en un mayor número de destinos, lo que puede atribuirse a sus bajos niveles de productividad; y, por otro lado, que Bolivia no ha desarrollado políticas para la promoción de las exportaciones que, además de fomentar la productividad, faciliten las condiciones institucionales para incrementar el acceso a mayor número de destinos (CEBP, 2023).

12 Medida como PIB por persona empleada y excluyente de China.

Figura 2.7.3

Índice de penetración de las exportaciones



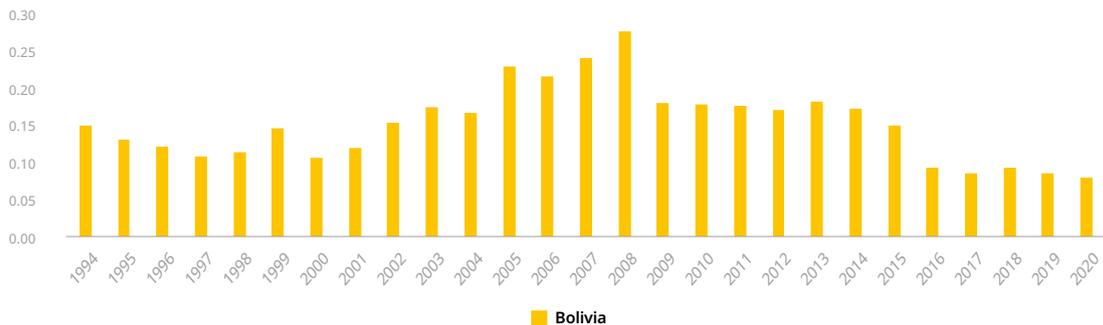
Fuente: Banco Mundial

Un elemento adicional que debe ser considerado al evaluarse el alcance de la oferta exportable boliviana es su nivel de complejidad. El índice de complejidad económica (en inglés, ECI)¹³ ordena a los países según lo diversa y compleja que sea su oferta exportable, lo que se asocia con las capacidades productivas de ese país. En 2020, Bolivia ocupó el lugar 110 de 133 países en términos de complejidad, posición que representó un empeoramiento de este nivel, que retrocedió 4 posiciones. Aquellos países con exportaciones de productos más complejos de lo esperado dado su nivel de ingresos crecen de forma más rápida (Hausmann et al., 2013). El *Atlas de Complejidad Económica* del Growth Lab concluye que, para 2020, la complejidad de los principales productos exportados por Bolivia —mayormente minerales— era entre baja y moderada.

Por otro lado, el índice de concentración de mercado Herfindahl Hirschman (HHI) ilustra sobre el nivel de dependencia de un país de sus socios de exportación. Un índice cercano a 1 significa que existe una alta concentración de las exportaciones; es decir, que se comercializa con pocos mercados. Entre 1994 y 2020, Bolivia experimentó una reducción en este índice, que pasó de 0.15 al inicio del periodo a 0.08 a su cierre. Este comportamiento sugiere que, luego de una época de alta concentración de las exportaciones entre 2005 y 2008, el país ha podido reducir su dependencia de ciertos socios de exportación. A 2020, los principales socios de Bolivia eran Brasil con 17.1 %, Argentina con 15.3 % e India con 11.9 % (Atlas, 2020).

Figura 2.7.4

Índice de concentración de mercado HHI



Fuente: Banco Mundial

13 Este índice fue desarrollado por el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard y contiene datos comparativos desde 1995 para 133 países. Se puede acceder aquí: <https://atlas.cid.harvard.edu/rankings>.

Existen oportunidades para desconcentrar el mercado de exportación boliviano tanto a nivel de productos como de oferta exportable. Según un informe elaborado por la CEPB y la OIT, algunos sectores productivos con alto potencial —alimentos orgánicos, biocomercio de frutos del bosque, industria de alimentos andinos (cereales y camélidos) y frutos secos de los valles, entre otros— pueden ser explotados con la creación o adaptación de un marco institucional específico y la construcción de estrategias de promoción especializadas (CEPB-OIT, 2021).

2.8. Derecho de propiedad y Estado de derecho

Garantizar el derecho de propiedad eleva los niveles de confianza entre los tenedores de tierras y promueve la inversión, lo que, a su vez, aumenta la productividad. En efecto, un análisis de veinte estudios de distintos países de ingresos bajos y medio-bajos de América Latina, el sur y el este de Asia, y África demuestra cómo el reconocimiento de derechos de propiedad y la tenencia de tierras agrícolas fomentan la productividad e incrementan los ingresos (Lawry et al., 2014). Este efecto positivo se atribuye a la alta percepción de seguridad de la tenencia de la tierra y las inversiones realizadas (Lawry et al., 2014).

Sin embargo, el derecho de propiedad no se limita a la regulación de la tenencia de la tierra: el respeto a las ideas a través del resguardo de la propiedad intelectual y las patentes es otro de los elementos que se constituyen como propiedad privada. En un estudio realizado en 95 países durante el periodo 2001-2018 para examinar el rol de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la productividad total de los factores (PTF), los autores hallaron una relación en forma de U invertida en los países en desarrollo y desarrollados, lo que sugiere un nivel óptimo de protección que tiende a promover la productividad (Su et al., 2022).

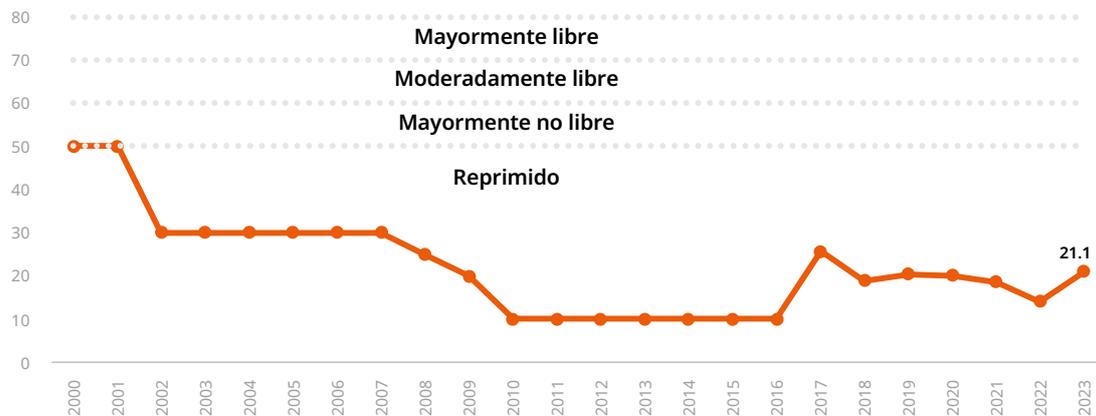
La fundación Heritage calcula un reconocido índice de libertad económica que incluye un componente de derecho de propiedad¹⁴: se evalúa en qué medida el marco legal de un país permite a las personas adquirir y utilizar una propiedad privada, y hasta qué punto sus derechos están garantizados por la legislación vigente. Algunos de los elementos que se toman en cuenta son el respeto al derecho de propiedad en general e intelectual en particular, la calidad de ejecución de los contratos y la aplicación de la ley. La puntuación va de 0 a 100: a mayor puntuación, mayor garantía de los derechos de propiedad.

Al respecto, en las últimas dos décadas Bolivia no ha logrado mejorar la garantía de los derechos de propiedad, y ha permanecido como una economía reprimida según la categorización en este índice. De hecho, el posicionamiento del país pasó de 50/100 en el año 2000 a 21.1/100 en 2023 (se redujo a menos de la mitad). Diferentes acciones han incidido negativamente en el derecho de propiedad, como por ejemplo el Decreto nro. 3371 de 2017, que permite a los trabajadores convertir empresas en proceso de cierre en empresas comunitarias o sociales.

¹⁴ El derecho de propiedad se mide evaluando el riesgo de expropiación, el respeto a los derechos de propiedad intelectual, y la aplicación de contratos y leyes sobre derechos de propiedad. El índice usa diversas fuentes. Para más información: <https://www.heritage.org/index/about>.

Figura 2.8.1

Índice de derecho de propiedad



Fuente: Datos y clasificaciones de la Heritage Foundation, índice de libertad económica, componente de derecho de propiedad.

El Estado de derecho (el marco de leyes e instituciones) es otro de los pilares institucionales que promueve la productividad, y hace referencia al imperio de la ley en una sociedad —incluso por encima del mismo Gobierno—; a su aplicación por igual a todas las personas en circunstancias similares; y a un Poder Judicial independiente de los demás poderes (Stein, 2009). De igual forma, el Estado de derecho se sustenta en el valor de que la ley es justa y protege los derechos humanos de todos los ciudadanos (Stein, 2009).

La evidencia en diversos países demuestra que el Estado de derecho impulsa la productividad laboral, el crecimiento económico y la innovación: en un estudio de 27 países europeos entre 1998 y 2005, Roth (2022) halla que afecta el crecimiento de la productividad laboral de las empresas a través de dos canales: la estimulación del crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) y la influencia positiva en las inversiones empresariales en capital intangible al garantizar el derecho de propiedad, lo que contribuye a facilitar la transformación de una economía en una economía del conocimiento. El autor también destaca que el Estado de derecho contribuye a reducir los costos de transacción, lo que, a su vez, ejerce un efecto positivo en el desempeño económico (Roth, 2022). Otros autores, a partir de una muestra de 120 países, encuentran una relación estadísticamente significativa entre Estado de derecho —entre otras variables como la esperanza de vida y la participación de la inversión— y crecimiento económico medido por PIB per cápita y productividad laboral (Guillemette et al., 2017).

El Banco Mundial, a través de sus indicadores de gobernanza mundial (WGI, por sus siglas en inglés), mide seis dimensiones de gobernanza¹⁵, dos de las cuales, calidad regulatoria y Estado de derecho, han sido incluidas para entender el panorama boliviano. El indicador de calidad regulatoria abarca las percepciones relacionadas con las habilidades de los gobiernos para formular e implementar políticas públicas y regulaciones funcionales que promuevan el desarrollo del sector privado. Por su parte, el indicador de Estado de derecho comprende la percepción de hasta qué punto se respetan las reglas de la sociedad, la calidad de la policía, las cortes y la aplicación de los contratos¹⁶. Mientras un indicador captura la funcionalidad de las políticas públicas, el otro da una mirada a la calidad de la aplicación de leyes y reglas¹⁷.

15 Para más información, ver <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.

16 Para la definición detallada y las fuentes de los indicadores, puede consultar <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.

17 Opiniones e interpretación expresadas por los autores de este informe.

Al igual que lo que respecta al derecho de propiedad, Bolivia exhibe una tendencia decreciente en la percepción del Estado de derecho y la calidad regulatoria: en el año 2000, el país presentaba un ranking percentil en este subíndice de 39.8, mientras que para 2021 se situaba en 11.5. Asimismo, el subíndice calidad regulatoria, más afectado que el anterior, decreció de 54.9 a 11.1 en el mismo periodo. En Estado de derecho, el agregado de países de la OCDE ocupaba el percentil 87.1 y Latinoamérica y el Caribe, 49; en tanto que en calidad regulatoria, los percentiles eran de 87.5 y 52.6, respectivamente (WGI)¹⁸. La percepción empresarial reciente es cónsona con estos resultados: el 52 % de este grupo señala que el Gobierno no produce un marco regulatorio que promueva la expansión de las operaciones empresariales, y un 63 % está totalmente de acuerdo en que los actores políticos se entrometen en la justicia boliviana (CEPB, 2021).

En las series se hace notorio cómo este declive se experimenta de manera pronunciada en 2005 y continúa su decrecimiento a partir de 2014. El año 2005 se caracterizó por la presencia de luchas sociales en las que se presionaba por la devolución al Estado de los recursos naturales bolivianos que se encontraban en manos empresariales, y por la celebración de un referendo nacional para la recuperación de las reservas de gas. Este escenario fue un punto de alta incidencia para el debilitamiento del sistema político imperante y para el ascenso de Evo Morales (Restrepo, 2016).

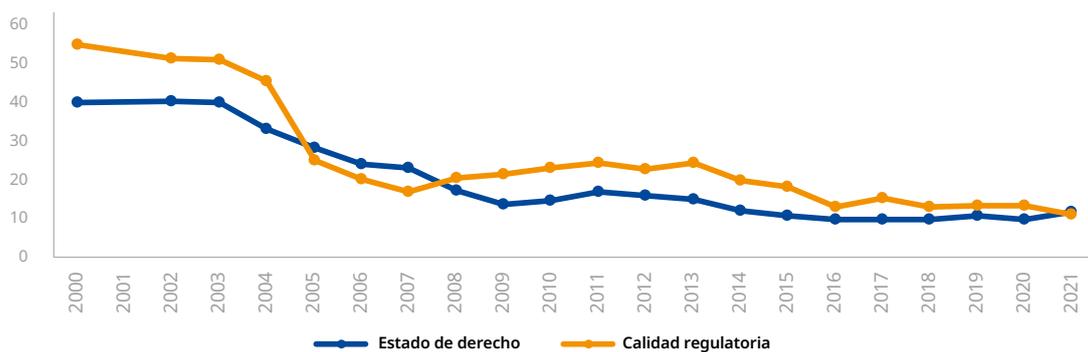
Con la llegada de Morales al poder se inició un proceso de nacionalización de los recursos naturales; así, por Decreto de Nacionalización nro. 28701 de 2006 el Estado se dispuso a recuperar la propiedad y el control de los hidrocarburos (Vargas, 2009). Esta iniciativa tuvo como desenlace la expropiación de socios comerciales de todo el mundo —compañías metalúrgicas, de electricidad y de aviación, entre otras—, lo que se presume afectó el índice de derecho de propiedad desde ese entonces (BBC, 2013).

Los altos niveles de polarización política derivan en manifestaciones sociales frecuentes contra las decisiones gubernamentales, por lo que se dificulta la concertación de medidas económicas que potencialmente redunden en una mayor productividad: el 81 % de las empresas encuestadas indica que la polarización política obstaculiza convenir medidas económicas (CEPB-OIT, 2021). Un ejemplo de los efectos nocivos de esta polarización fue la crisis política de 2019 originada por reclamos de fraude electoral que terminó con la renuncia y salida del entonces presidente Evo Morales.

Figura 2.8.2

Percepción del Estado de derecho y de la calidad regulatoria

Ranking percentil de 0-100 (mejor)¹⁹



Fuente: Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators (WGI).

¹⁸ Aunque los promedios de la OCDE y Latinoamérica y el Caribe son obtenidos del portal de WGI, al no publicarse los intervalos de confianza para estos agregados no se puede hacer una comparación absoluta entre las series, como aconseja la metodología. La comparación sirve solo de ilustración. Metodología WGI: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.

¹⁹ Se presenta el rango percentil promedio. Este ranking es actualizado por los autores cada año, por lo que permite ver una evolución de los países en el tiempo. El propio WGI recomienda enfocarse en los cambios en tendencias (mayormente en una década) más que en año por año.

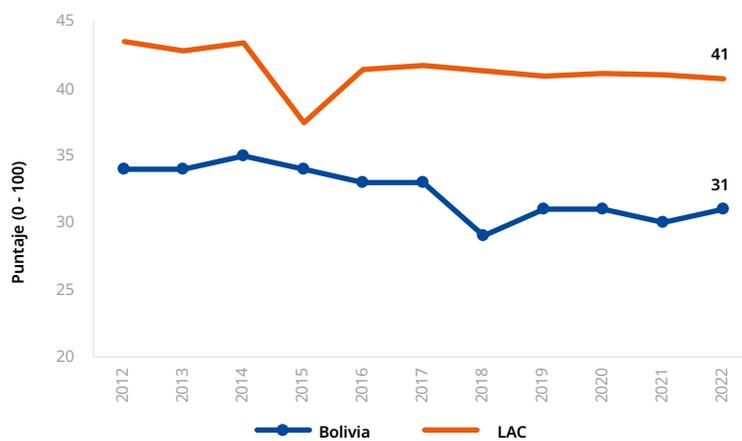
2.9. Gobernanza y política anticorrupción

La relación negativa entre prácticas de mala gobernanza como la corrupción, por un lado, y la productividad de un país, por el otro, ha quedado evidenciada. La corrupción afecta la productividad de los países porque dificulta la eficiente ubicación de los recursos. Los gobiernos corruptos toman decisiones sobre la base de la búsqueda de beneficios personales, y no es posible maximizar el bienestar social mientras se otorgue la provisión de bienes y servicios públicos a contratistas con conexiones o dispuestos a ofrecer sobornos antes que a aquellos que ofrecen la mejor calidad (Rose-Ackerman y Palifka, 2016). En efecto, de acuerdo con un estimado del Foro Económico Mundial (FEM), la corrupción aumenta los costos del sector privado para hacer negocios en cerca de un 10 % (OCDE, 2014).

Figura 2.9.1

Índice de percepción de la corrupción

0-100 (menos corrupción)



Fuente: Transparencia Internacional

Las bajas puntuaciones de Bolivia en garantía del derecho de propiedad y resguardo del Estado de derecho son consistentes con la percepción sobre la corrupción y su control. Aunque se observa un deterioro de este indicador, la caída en la última década ha sido menos estrepitosa que la de los indicadores institucionales anteriormente analizados. Así, el país pasó de un índice de percepción de la corrupción de 34/100 puntos en el año 2012 a 31/100 en 2022. Este desempeño se sitúa significativamente por debajo del de los países de la OCDE (66/100), e incluso del promedio de la región (41/100).

De acuerdo con el reporte del índice de transformación de la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, la corrupción es un mal arraigado en Bolivia. Diversos escándalos que han involucrado a las administraciones de Morales y Áñez así como a altos funcionarios del Gobierno han tenido eco en los medios (BT Index, 2022). Sin embargo, las debilidades en materia judicial y la falta de voluntad política no han permitido un control sistemático de este flagelo, que se hizo evidente durante los tiempos de la Covid-19 (EIU, 2022). Una encuesta al sector privado realizada en 2021 corrobora estos datos: el 42 % de las 576 empresas participantes declaró que frecuentemente tuvo que realizar pagos extraordinarios para evitar trabas administrativas (CEPB, 2021).

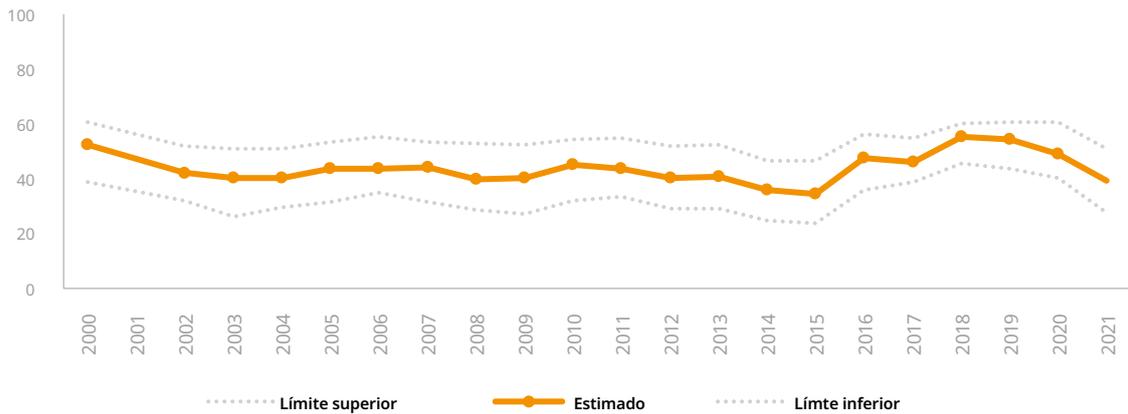
La otra cara de la moneda evalúa en qué medida está siendo controlada la corrupción. El índice de percepción del control de la corrupción del Banco Mundial analiza este fenómeno, y puede verse que desde el año 2000 el ranking percentil de Bolivia ha empeorado: de 52.1 al inicio del periodo, ha pasado a 38.9 en 2021, año en que el agregado de países de la OCDE ocupaba el percentil 84.4 y Latinoamérica y el Caribe, el 52.8 (WGI)²⁰. El resultado de Bolivia puede ser explicado por la concentración de los poderes del Estado en la última década: entre 2009 y 2020 el control de más de dos tercios de ambas cámaras del Parlamento por el partido MAS devino en una segregación de los poderes del Estado que dificultó el control del Poder Ejecutivo por parte de la oposición (BT Index, 2022). Por su parte, de acuerdo con el índice de transformación de la fundación [Bertelsmann Stiftung](#), las elecciones judiciales de 2011 y 2017 resultaron en la configuración de un Poder Judicial muy afín al Gobierno de turno (BT Index, 2022).

Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial (WGI) se alimentan de varias fuentes, algunas de las cuales califican a Bolivia en un percentil menor o mayor, lo que explica los límites superiores e inferiores. Para 2021, la diferencia entre el estimado promedio y el límite inferior era de aproximadamente 11.5 percentiles, mientras que con el límite superior era de 12. Las grandes diferencias pueden deberse a la disparidad en la percepción del control de la corrupción dadas las diversas fuentes y sectores con los que se construye el indicador. En el caso de Bolivia, se presenta una distancia similar entre ambos límites y el percentil promedio.

Figura 2.9.2

Percepción del control de la corrupción

Ranking percentil de 0-100 (mejor)



Fuente: Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators (WGI).

²⁰ Aunque los promedios de la OCDE y Latinoamérica y el Caribe son obtenidos del portal de WGI, al no publicarse los intervalos de confianza para estos agregados no se puede hacer una comparación absoluta entre las series, tal como aconseja la metodología. La comparación sirve solo de ilustración. Metodología WGI: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.

Capítulo 3

Impulsando la productividad en Bolivia

El análisis de la productividad realizado en este informe sobre la base de los datos de The Conference Board evidencia que entre 1990 y 2022 la productividad total de los factores (PTF) experimentó una tendencia a la baja en Bolivia. Adicionalmente, se concluye que su contribución al crecimiento económico fue mayoritariamente negativa, en consonancia con las conclusiones halladas por otros autores (Fernández-Arias, 2014; BID, 2010).

Aunque la participación de capital y trabajo es cercana, la contribución del primero ha sido el principal motor del crecimiento económico. Por otro lado, si bien en Bolivia la productividad laboral por trabajador ha aumentado en los últimos 30 años, se ha mantenido por debajo de la de sus pares en América Latina y el Caribe. A su vez, el crecimiento de la productividad laboral de los diferentes sectores ha sido históricamente negativo, con excepción de los sectores Agropecuario y de Minería (BID, 2010). Este desempeño supone áreas de oportunidad para el fomento de la productividad. Por ello, los diferentes actores de la sociedad boliviana deben abocarse al diálogo social para revisar su modelo productivo y consensuar políticas públicas que fomenten la productividad. En particular, se destaca la necesidad de seguir incentivando inversiones de capital y de cerrar la brecha entre las habilidades y las demandas de las empresas. De igual forma, los altos niveles de informalidad se presentan como el gran reto para la productividad en Bolivia.

En miras de explotar estas oportunidades, en este capítulo se presentan reflexiones y recomendaciones orientadas a fomentar un entorno empresarial propicio para mayores niveles de productividad. En tal contexto, es esencial el rol de las organizaciones empresariales para fortalecer, analizar e impulsar las ideas presentadas.

1. Alinear la oferta académica terciaria con la realidad y necesidades del mercado laboral enfatizando la inclusión laboral de los jóvenes. Una educación de calidad conlleva una alineación con el mercado laboral. Se estima que solo tres de cada diez bachilleres eligen carreras técnicas en el país. En adición, la educación universitaria no se sincroniza con las demandas del aparato productivo (CEPB-OIT, 2021). Uno de los grupos más perjudicados en Bolivia por el desempleo y la informalidad es el de los jóvenes. En tal sentido, se sugiere la creación de políticas que promuevan su inclusión laboral tales como la formación dual (formación en empresa y escuela), que permitiría agilizar la transición de los jóvenes desde los centros educativos hacia la industria. Paralelamente, se requiere considerar la ampliación de la formación técnica como vía para su acceso expedito al mercado laboral así como mejorar las capacidades de la fuerza laboral actual y fomentar el crecimiento del sector Industrial.

Estas acciones buscan coordinar la educación y el desarrollo de habilidades con la inserción y el cumplimiento de las demandas laborales de las empresas. En Bolivia, la informalidad es uno de los grandes retos: representa cerca del 81.5 % del empleo total y, para los jóvenes, alcanza el 94 %. Esta realidad disminuye en aquellos jóvenes con educación terciaria o técnica, por lo que desarrollar sus habilidades incrementará su empleabilidad y fomentará el empleo formal en lugar del informal y los

emprendimientos por necesidad. Las empresas son esenciales para crear las condiciones requeridas para estas acciones duales de formación y trabajo, y para garantizar los incentivos laborales que atraigan y retengan a estos trabajadores.

- 2. Elevar la calidad educativa presente y futura, y transparentar su medición.** Si bien los años de escolaridad promedio y la expectativa de habilidades futuras de la fuerza laboral boliviana presentan mejoras, garantizar la calidad educativa todavía constituye un reto para el país. A 2021, Bolivia promediaba 9.8 años de escolaridad por persona mayor de 25 años, por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe (9.1) aunque alejado del promedio de la OCDE (12 años). Al mismo tiempo, en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial las expectativas de las habilidades futuras de la fuerza laboral se mantienen por encima de las habilidades de la fuerza laboral actual. Esta tendencia apunta a que el país está desarrollando una fuerza laboral más preparada, y para estimular tal tendencia es esencial garantizar una educación de calidad que conduzca a un mejor aprovechamiento de los factores de producción y, por ende, a elevar el crecimiento de la PTF.

Por su parte, el paradigma de “Vivir Bien” llevó a la inaplicación de pruebas estandarizadas, lo que dificultó la medición de la calidad educativa en Bolivia. Los reducidos datos del Ministerio de Educación de comparativos con las pruebas internacionales ERCE apuntan a que la calidad es inferior a la del promedio de la región. Para tener mayor claridad acerca de las brechas, se recomienda retomar la participación de Bolivia en evaluaciones internacionales de calidad de la educación, tales como las pruebas ERCE y PISA, que permiten transparentar la eficiencia del gasto público en este rubro —que es alto en Bolivia en comparación con la región (9.8 % frente a 4.2 % en 2020)— y tomar medidas tendentes a mejorar las áreas de mayor debilidad. Asimismo, la falta de información sobre la calidad educativa en el país constituye uno de los obstáculos para medir su índice de capital humano (De la Cruz, 2021). Únicamente Bolivia y Venezuela no poseen datos sobre este indicador que resulta clave para alcanzar las metas de desarrollo sostenible y crecimiento productivo.

Contar con datos que permitan diagnosticar las debilidades formativas es esencial para el diálogo social efectivo sobre una educación de calidad y adaptada a las necesidades del aparato productivo. A su vez, se deben mantener los principios de no discriminación que buscaba el paradigma de “Vivir Bien” sobre los diversos pueblos del país. Las organizaciones empresariales pueden, por su parte, suplir los datos e identificar las necesidades de las empresas tanto en habilidades transversales (cognitivas y blandas), en específicas al puesto de trabajo, y a nivel digital. Otras organizaciones empresariales de la región han realizado o han sido beneficiadas por la comprensión de la brecha de habilidades con mayor especificidad: por ejemplo, Ecuador, con el apoyo de la OIT, realizó un estudio sobre el tema; y Chile, Ecuador, México, y Perú formaron parte del estudio sobre habilidades de las personas adultas elaborado por la OCDE (llamado PIAAC).

- 3. Impulsar el trabajo decente y la economía violeta.** Bolivia exhibe una de las tasas de desempleo más bajas de Latinoamérica y el Caribe y, sin embargo, la incidencia de la informalidad es superior a la del promedio de la región. La informalidad es el gran reto del país. Se deben fomentar políticas para reducir las brechas de informalidad entre grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, residentes de zonas rurales, personas no educadas) y no vulnerables, así como elevar la formalización y garantía de los derechos de los trabajadores informales. La OIT, a través de su Programa de Trabajo Decente, impulsa cuatro pilares: la creación de empleos, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo social, y destaca que el sector informal presenta altos déficits de trabajo decente (OIT, 2015).

Un punto de partida para Bolivia es facilitar la participación laboral de las mujeres mediante la reducción de las desigualdades existentes. Si bien la brecha laboral de género ha ido disminuyendo, a 2021 la ocupación laboral de las mujeres fue 13.7 puntos porcentuales menor que la de los hombres.

En gran parte, la responsabilidad relativa al cuidado de las personas y el trabajo doméstico (actividades no remuneradas) que recae de forma elevada en ellas las desmotivan de buscar empleo (OIT, 2022d). El informe mundial de la OIT Los cuidados en el trabajo: invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo y su informe regional complementario para América Latina y el Caribe identifican diversas brechas y ofrecen recomendaciones para reducir las. Además, aún existen prohibiciones que fomentan estereotipos y desmotivan la participación laboral, por ejemplo la prohibición general de que las mujeres realicen trabajos nocturnos o catalogados como peligrosos (OIT, 2022e).

Bolivia destaca por tener la licencia de maternidad con remuneración porcentual más alta de la región y, sin embargo, la cobertura efectiva —superior a la de muchos países de la región— solo alcanzaba al 59.3 % de las mujeres que dieron a luz en 2020. La licencia por paternidad, reconocida en 2011, es de tres días.

Entre sus recomendaciones, los informes destacan incrementar la inversión en cuidados, particularmente extender las licencias de maternidad y paternidad, y las interrupciones para lactancia; así como ampliar la cobertura y calidad de los servicios de larga duración consistentes en cuidado infantil y de personas adultas mayores. Algunas de estas acciones requieren que el Estado las priorice e invierta en ellas. Dado que otras acciones pueden implicar una carga para las empresas, se debe fomentar el diálogo social y tripartito de aquellas necesarias para impulsar la llamada “economía violeta”, que busca el empoderamiento de las mujeres y la reducción de sus barreras de acceso al mercado laboral.

4. Las mipymes como piedra angular del crecimiento productivo. Las mipymes representan el 85 % del tejido empresarial boliviano. A su vez, se estima que un 70 % de ellas opera en la informalidad (CEPB, 2022), y se encuentra en una trampa de baja productividad y alta informalidad que le impide alcanzar niveles mínimos de eficiencia para su crecimiento productivo. Para combatir esta realidad se debe abogar por su mayor acceso al crédito, por reducir sus costos regulatorios mientras se aumenta la efectividad de las políticas públicas, y por el apoyo a su profesionalización.

La falta de acceso al crédito es una de las principales barreras para la productividad de las pymes (Bloom et al., 2010). A pesar de sus tasas de interés menores al promedio regional, los niveles de acceso al crédito en Bolivia son inferiores. Como parte de su política financiera, el país busca priorizar la demanda de servicios financieros para sectores productivos como las micro, pequeñas y medianas empresas, y, asimismo, financiamiento para vivienda social. Cabe destacar que el Estado boliviano ejerce control sobre las tasas de interés y niveles mínimos de crédito, reestablecidos en 2020. Existen, además, instituciones especializadas en el sector, denominadas Bancos Pyme. Asimismo, es necesario evaluar cuáles son los factores que previenen el acceso al crédito a pesar de las políticas implementadas. A través de una encuesta a las empresas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) identificó un área de partida: el cumplimiento de la documentación exigida y la presentación de garantías.

Otra acción que los actores del país pueden ejecutar para apoyar a las mipymes y facilitar su transición hacia la formalidad es revisar un sistema tributario que ya tiene más de tres décadas de vigencia. De acuerdo con la encuesta realizada por la CEPB a 576 empresas, el 70 % afirma que la carga tributaria es un impedimento para formalizar una empresa. Además, destaca que bajar los impuestos sería el principal incentivo para la formalización (CEPB, 2021).

Se debe reconocer que las causas de la informalidad son complejas e interrelacionadas (Fernández, 2022; Loayza, 2018). Por ello, las estrategias de formalización deben hacer la transición atractiva y considerar las diferentes realidades de las empresas que existen en la informalidad, por ejemplo mediante la flexibilización de los mercados laborales en el ámbito formal para no mantener la contratación informal como algo conveniente. Las estrategias también podrían incluir la disminución de las cargas administrativas para las firmas formales y aquellas que quieran acceder a la formalidad. El cumplimiento y monitoreo de las políticas públicas que buscan favorecer la formalización es también un determinante de su efectividad (Ulyssea, 2018).

Por su parte, las organizaciones empresariales pueden impulsar la profesionalización y digitalización de las mipymes: la CEPB estima que solo un 0.9 % del total de empresas registradas (excluyendo las unipersonales) cuenta con sistemas de gestión y de productos certificados (CEPB, 2022). Esta realidad reclama el diseño de un programa para la mejora de la gestión empresarial mipyme en colaboración con las organizaciones empresariales y el Gobierno. La pandemia ha demostrado la importancia de la digitalización para incrementar la resiliencia y productividad de las empresas (OIT, 2022c; OIT, 2022f; OIT, 2020). El recurso regional de ACT/EMP <https://actempdigital-lac.com/ooee-digital/> presenta algunas de las iniciativas llevadas a cabo por las organizaciones empresariales de la región para fomentar la digitalización de las empresas, como el apoyo a su formalización, comercio, planificación estratégica y acceso a las tecnologías (OIT, 2022c).

5. Fomentar la innovación y adaptación tecnológica como motores de cambio para el modelo productivo. Araujo et al. (2011), al descomponer la PTF de varios países de América Latina, incluyendo Bolivia, encuentran que en la región el problema recae principalmente en la eficiencia negativa de la PTF; es decir, si bien existe progreso técnico (aumenta la frontera tecnológica), tal progreso no es usado o diseminado de forma efectiva. Aunque Bolivia muestra mejoras en los índices de adopción de tecnología de frontera, su posición es inferior a la de varios países de la región, además de presentar diversos retos en I+D, como contar con datos actualizados sobre la inversión en este rubro (el último dato registrado por la Unesco es de 2009). Al respecto, las estimaciones más recientes la colocan cerca de 0.17 % de PIB, por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe, que es cercano a 0.7 % (De la Cruz, 2020).

El Centro de Comercio Internacional (ITC), al evaluar el entorno de negocios para la era digital en Bolivia, concluye que existe baja colaboración entre las universidades y las industrias en I+D. Además, el uso de patentes por empresas exportadoras se reporta como inexistente (ITC, 2018): el subíndice de I+D del Frontier Technology Index incluye las patentes registradas de un país, y en este aspecto Bolivia se presenta como el más rezagado de los países estudiados.

De acuerdo con la CEPB, hay poca innovación proveniente del sector empresarial. En una evaluación de los sectores Servicios, Comercio y Manufactura, el más innovador fue Servicios, aunque apenas un 8 % de las empresas reportó haber realizado alguna innovación tecnológica. En el desglose de la información, vemos que mientras el 27 % de las empresas grandes reportaba innovaciones, solo lo hacía el 7 % de las microempresas (CEPB, 2021). A esta realidad se suman los retos sobre derechos de propiedad intelectual: existe un mercado de productos falsificados que, de acuerdo con una encuesta empresarial, compiten con la industria manufacturera, las ventas al por mayor, y con el sector de Información y Comunicaciones (CEPB, 2021). Además, en cuanto al derecho de propiedad —que incluye el respeto a la propiedad intelectual—, Bolivia se calificaba con 21 sobre 100 puntos en 2023. Se debe invertir en proteger la propiedad intelectual e, igualmente, motivar y monitorear la inversión en I+D.

Por su parte, las organizaciones empresariales pueden fomentar la colaboración e importancia de la I+D y de la innovación. De acuerdo con los últimos datos de 2009, el sector empresarial boliviano

representaba el 4 % del gasto en I+D; como comparación, en Colombia la organización empresarial cúpula monitorea y apoya a 347 empresas innovadoras cuyos ingresos representan cerca del 24 % del PIB colombiano. A su vez, el sector empresarial de este país presentaba un aporte estimado del 45 % del gasto en I+D frente a un 10 % del Gobierno.

Para alcanzar un entorno de negocios propicio para la era digital, el ITC recomienda apoyar a las mipymes en destinar recursos para adaptar tecnologías, desarrollar las habilidades de su personal, crear colaboraciones y representarlas al negociar con proveedores de plataformas y entes regulatorios (ITC, 2018), acciones que necesitan el apoyo y liderazgo de las organizaciones empresariales. Un punto de partida son las empresas ya identificadas en el Mapeo TIC de Bolivia. Para alcanzar este entorno propicio se deben disminuir los altos costos de acceso a la infraestructura digital y aumentar el acceso a las conexiones de calidad, sobre todo en las zonas rurales. A su vez, es preciso elevar la confianza en estas tecnologías y en los servicios digitales mientras se protegen la privacidad y los derechos de las personas y las empresas (ITC, 2018).

- 6. Diversificar la estructura productiva y comercial del país a través del desarrollo de nuevos mercados.** De acuerdo con una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acerca de la productividad por sectores en Bolivia de 1990 a 2005, solo el Agropecuario y Minería presentaron crecimientos en su productividad (BID, 2010). Por su parte, según un informe elaborado por la CEPB y la OIT, existen sectores productivos con alto potencial, tales como los alimentos orgánicos, el biocomercio de frutos del bosque, la industria de alimentos andinos (cereales y camélidos) y los frutos secos de los valles, entre otros, que pueden ser explotados con la creación o adaptación de un marco institucional para la construcción de estrategias de promoción especializadas (CEPB-OIT, 2021). Se sugiere diseñar estrategias que se enfoquen en desarrollar estos sectores puntuales y ampliar la cartera de destinos de exportación.

El fortalecimiento de la unidad de promoción de exportaciones de Bolivia y el trabajo mancomunado con el sector privado son claves para lograr ampliar la oferta productiva y exportable del país. Estas estrategias deben tener como objetivo el apoyo y desarrollo de las mipymes en estos mercados. El ITC destaca que las asociaciones que promueven el comercio deben apoyar a las pymes para que aprovechen el big data y se convierta en información útil para sus decisiones comerciales (ITC, 2018).

La diversificación permite la expansión a nuevos mercados y la disminución de la dependencia de las exportaciones de hidrocarburos y minerales. Asimismo, abre caminos para una transición justa de los trabajadores y las poblaciones que dependen de estas industrias hacia nuevos mercados más sostenibles, digitales y formales que eleven el trabajo decente. Esta diversificación y cambio del modelo productivo no puede llevarse a cabo de forma efectiva sin el diálogo social e intervenciones holísticas que cuenten con la voz y el liderazgo del sector empresarial.

- 7. Aumentar la inversión en infraestructura y aprovechar los marcos de alianzas público-privadas.** Bolivia presenta importantes debilidades en materia de infraestructura, y se ubica como uno de los países peor posicionados no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo (en 2019, el 122 de 141 países, de acuerdo con el índice de competitividad global del FEM), a pesar de que la evidencia empírica demuestra el potencial de la inversión en infraestructura para impulsar el crecimiento económico. Por ello se sugiere promover políticas para la optimización de la infraestructura existente: en efecto, solo el 16 % de la infraestructura vial de Bolivia está asfaltada o pavimentada, y el 41.4 % de la brecha de inversión vial se relaciona con deficiencias en calidad, es decir, mantenimiento y reemplazo (CEPB-OIT, 2021; Brichetti et al., 2019).

Un punto de partida consiste en consensuar y diseñar un plan de inversión pública que promueva la expansión de la infraestructura y esté orientado a aquellas obras que ejerzan mayor impacto en la productividad. Estudios realizados por el sector privado encuentran inversiones con alta potencialidad para aportar al crecimiento, tales como fibra óptica, puertos secos y almacenes. Otros sectores, como la industria de alimentos, también se beneficiarían de inversiones en infraestructura (CEPB-OIT, 2021).

Para llevar estos hallazgos a la realidad, se deben aprovechar los marcos de las alianzas público-privadas. En Bolivia existe complementariedad entre la inversión pública y la privada, por lo que, en el largo plazo, el crecimiento de la primera necesariamente se traduce en el de la segunda. En este sentido, se propone generar una agenda de cooperación público-privada que identifique proyectos que el sector privado pueda impulsar de manera inmediata con la agilización y cooperación del sector público, y que sean de alto impacto en la productividad. De esta manera se podría acelerar la inversión en infraestructura y el incremento de la productividad que traería consigo, y se mitigaría el efecto de desplazamiento de la inversión privada o crowding out que se da en el corto plazo cuando el sector público promueve la inversión en infraestructura (CEPB-OIT, 2021). Para lograrlo, el diálogo social y la continua participación de las organizaciones empresariales son esenciales.

8. Garantizar un Estado de derecho propicio para las inversiones. En las últimas dos décadas, Bolivia no ha logrado mejorar la garantía de los derechos de propiedad: el posicionamiento del país pasó de 50/100 en el año 2000 a 21.1/100 en 2023, de acuerdo con el índice de la fundación Heritage. Bolivia también presenta una tendencia decreciente en la percepción del Estado de derecho y la calidad regulatoria, y la percepción empresarial reciente es cónsona con estos resultados: el 52 % de los empresarios señala que el Gobierno carece de un marco regulatorio que promueva la expansión de las operaciones empresariales (CEPB, 2021).

A lo expuesto se suma el arraigo de la corrupción reportado por organizaciones especializadas como Transparencia Internacional y la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, así como por empresas encuestadas y evidencias de escándalos recientes (CEPB, 2021; EIU, 2022). Estas realidades y percepciones dificultan atraer y consolidar inversiones que promuevan la productividad en Bolivia. Se deben realizar esfuerzos para elevar la confianza de los inversionistas y propiciar un entorno legal predecible y favorable para las inversiones. En particular, las medidas deben promover las inversiones relativas a la explotación de recursos naturales, punta de lanza de la economía boliviana que se ha visto severamente afectada en los últimos quince años por la ausencia del Estado de derecho. Estas inversiones deben estar acompañadas por una visión de sostenibilidad y transición justa.

Asimismo, se deben realizar esfuerzos que incidan en el control de la corrupción, entre ellos acentuar la separación de los poderes del Estado, fortalecer el Sistema Judicial y profesionalizar la función pública. A raíz de la reforma constitucional de 2009, un gran número de los jueces del país ha quedado instalado en un ámbito transitorio, lo que dificulta un ambiente de estabilidad basado en la meritocracia. Se estima que de 1098 jueces, 489 no son de carrera; es decir, no son elegidos en un proceso basado en méritos y principios de no discriminación (Orías, agosto 2022). En cuanto al desarrollo del servicio civil, una evaluación desde el BID por Velarde et al. (2014) muestra que, a 2013, este había retrocedido en comparación con el año 2003, al pasar de una puntuación de 26/100 a una de 21/100, niveles que, en ambos casos, se ubican en la categorización de bajo desarrollo del servicio civil (0 a 39 puntos).

Referencias bibliográficas

- Acemoglu, D.; Zilibotti, F.** (1997). Was Prometheus Unbound by Chance? Risk, Diversification, and Growth. *Journal of Political Economy*, 105(4), 709-751.
- Akbulut, R.** (2011). Sectoral Changes and the Increase in Women's Labor Force Participation. *Macroeconomic Dynamics*, 15(2), 240-264.
- Aleman, M. M.; Lluch, A. V.; Lópe, J. F. V.; García, J. G. S.** (2021). E-learning in "innovation, creativity and entrepreneurship": Exploring the new opportunities and challenges of technologies. *Journal of Small Business Strategy*, 31(1), 39-50.
- Alston, L. J.; Mueller, B.** (2010). Property Rights, Land Conflict and Tenancy in Brazil (No. w15771). National Bureau of Economic Research.
- Asociación de Bancos de Bolivia-Asoban** (2021). Presentación.
- Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI** (mayo de 2023a). Cobertura de servicios financieros por municipio. Disponible en: <https://www.asfi.gob.bo/index.php/int-fin-estadisticas/int-fin-cobertura.html>.
- ASFI** (2023b). Estadísticas del Sistema Financiero. [Análisis del Sistema Financiero \(asfi.gob.bo\)](https://www.asfi.gob.bo).
- ASFI** (2021). Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2021. [Estudios e investigaciones \(asfi.gob.bo\)](https://www.asfi.gob.bo).
- Azeng, T. F.; Yogo, T. U.** (2013). Youth Unemployment and Political Instability in Selected Developing Countries. Tunis, Tunisia: African Development Bank.
- Banco Interamericano de Desarrollo-BID. Brichetti, J. P.; Mastronardi, L.; Rivas, M. E.; Serebrisky, T.; Solís, B.** (2021). La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- BID. Velarde et al.** (2014). Una década de reformas del servicio civil en América Latina (2004-130). Disponible en: http://www.detrasdela-cortina.com.pe/images/download/Indice%20de%20Desarrollo%20del%20Servicio%20Civil_BID%202014.pdf.
- BID. Agosin et al.** (2010). La era de la productividad: cómo transformar las economías desde sus cimientos. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/la-era-de-la-productividad-como-transformar-las-economias-desde-sus-cimientos-0>.
- Banco Mundial. Ha, Jongrim; Kose, M. Ayhan; Ohnsorge, Franziska** (2021). One-Stop Source: A Global Database of Inflation. Policy Research Working Paper; No. 9737. World Bank, Washington, D. C.
- Banco Mundial. Calice, P.; Díaz, F.; Masetti, O.** (2020). Interest Rate Repression Around the World. World Bank, Washington, D. C.
- Banerjee, A; Duflo, E.** (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty.
- BBC** (2013, febrero 20). Bolivia y las expropiaciones: un resultado mixto. BBC News Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/02/130220_bolivia_expropiaciones2.

- Becker, G.** (1994). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, Third Edition. National Bureau of Economic Research.
- Bessant, J.; Tidd, J.** (2007). *Innovation and Entrepreneurship*.
- Bhatta, S. D.; Drennan, M. P.** (2003). The Economic Benefits of Public Investment in Transportation: A Review of Recent Literature. *Journal of Planning Education and Research*, 22, 288–296.
- Bloom, N.; Sadun, R.; Van Reenen, J.** (2016). *Management as a Technology?* National Bureau of Economic Research.
- Bloom, N.; Mahajan, A.; McKenzie, D.; Roberts, J.** (2010). Why Do Firms in Developing Countries Have Low Productivity?
- Bloom, N.; Van Reenen, J.** (2007). Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351-1408.
- B. T. Index.** (2012). Bertelsmann Stiftung. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-report/BOL#pos5>.
- Butler, A. W.; Cornaggia, J.** (2011). Does Access to External Finance Improve Productivity? Evidence from a Natural Experiment. *Journal of Financial Economics*, 99(1), 184-203.
- Calla, M. Z. O. P.** (2020). La evaluación de la calidad educativa en el paradigma de la educación para vivir en Bolivia. *Journal of Supranational Policies of Education*, (11), 106-126.
- Cette, G.; Fernald, J.; Mojon, B.** The pre-Great Recession Slowdown in Productivity. *European Economic Review*, 88, 3-20. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.03.012>.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Cepal, N. U.** (2021). Digital technologies for a new future. Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46817/S2000960_en.pdf.
- Cepal, N. U.** (2021). Los cuidados en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44361/1/S1801102_es.pdf.
- Confederación de Empresarios Privados de Bolivia-CEPB** (2021). Evaluación del entorno propicio para empresas sostenibles: Informe de Resultados Encuesta Sector Empresarial. Bolivia.
- Confederación de Empresarios Privados de Bolivia-Organización Internacional de Trabajo (CEPB-OIT)** (2021). Evaluación del entorno propicio para empresas sostenibles y propuestas para el desarrollo de Bolivia 2021. Bolivia.
- CEPB** (2022). Propuestas de política pública: propuestas para identificar limitantes de la productividad bajo un enfoque sistémico. Bolivia.
- Confederation of British Industry-CBI** (2017). *Unlocking Regional Growth. Understanding the Drivers of Productivity across the UK's Regions and Nations*. Disponible en: <https://www.cbi.org.uk/media/1170/cbi-unlocking-regional-growth.pdf>.
- Crespi, G.; Zuniga, P.** (2012). Innovation and Productivity: Evidence from Six Latin American Countries. *World Development*, 40(2), 273-290.
- De la Cruz, F.** (2021). Human Capital and Industrialization in Bolivia. *Journal of Government and Economics*, (3). Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100017>.

- De la Cruz, F.** (2020). Ayuda externa en Bolivia (2006-2019): el período post-neoliberal. *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo*, 7(1), 139-155. DOI 10.21500/23825014.4579. Disponible en: <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/view/4579/3753>.
- Decreto Supremo nro. 3771.** Disponible en: https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_050220192eac.pdf.
- Decreto Supremo nro. 4408.** Disponible en: https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_03122020e223.pdf.
- Deng, T.** (2013). Impacts of Transport Infrastructure on Productivity and Economic Growth: Recent Advances and Research Challenges. *Transport Reviews*, 33(6), 686-699.
- Dietrich, H.** (2012). Youth Unemployment in Europe. Theoretical considerations and empirical findings. Disponible en: library.fes.de/pdf-files/id/ipa/09227.pdf. Last access, 16(7), 2012.
- Drucker, P.** (2014). *Innovation and Entrepreneurship*. Routledge.
- Duggal, V. G.; Saltzman, C.; Klein, L. R.** (1999). Infrastructure and productivity: a nonlinear approach. *Journal of Econometrics*, 92(1), 47-74.
- Economist Intelligence Unit-EIU** (2020, Mayo 22). *Health minister arrested over corruption charges*. EIU. Disponible en: https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=49594188&Country=Bolivia&topic=Politics&subtopic=Fo_5.
- Fernández-Arias, E.** (2014). *Productivity and Factor Accumulation in Latin America and the Caribbean: A Database*. BID, 201.
- Flabbi, L.; Macis, M.; Moro, A.; Schivardi, F.** (2019). Do Female Executives Make a Difference? The Impact of Female Leadership on Gender Gaps and Firm Performance. *The Economic Journal*, 129(622), 2390-2423.
- Fondo Monetario Internacional-FMI. El-Ganainy et al.** (2021). Inclusion in the Labor Market. IMF Working Paper 21/141.
- FMI. Ostry et al.** (2018). Economic Gains from Gender Inclusion: New Mechanisms, New Evidence. Staff Discussion Notes. Disponible en: <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Economic-Gains-From-Gender-Inclusion-New-Mechanisms-New-Evidence-45543>.
- Foro Económico Mundial-FEM. McMillian, D.** Inflation: there's a vital way to reduce it that everyone overlooks—raise productivity. June 9, 2022. Disponible en: <https://www.weforum.org/agenda/2022/06/inflation-there-s-a-vital-way-to-reduce-it-that-everyone-overlooks-raise-productivity#:~:text=Why%20does%20productivity%20matter%20for,therefore%20associated%20with%20lower%20inflation>.
- FEM** (2019). Global Competitiveness Index. Disponible en: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
- Freire, C.** (2021, agosto). *The impact of frontier technologies on inequalities across countries*. IAP.UNIDO. <https://iap.unido.org/articles/impact-frontier-technologies-inequalities-across-countries>.
- Fundación Jubileo** (2018). Pasado y presente deuda pública de Bolivia 1970-2017. Serie Debate Público nro. 68. Disponible en: <https://jubileobolivia.com/download.php?k=490>.
- Galiani, S.; Schargrodsky, E.** (2010). Property rights for the poor: Effects of land titling. *Journal of Public Economics*, 94(9-10), 700-729.

- Giang, M. H.; Trung, B. H.; Yoshida, Y.; Xuan, T. D.; Que, M. T.** (2019). The Causal Effect of Access to Finance on Productivity of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Sustainability*, 11(19), 5451.
- Global Entrepreneurship Monitor-GEM** (2019). Disponible en: <https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report>.
- Guillemette, Y.; Kopoin, A.; Turner, D.; De Mauro, A.** (2017). A revised approach to productivity convergence in long-term scenarios.
- Hausmann et al.** (2013). The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qf8jp>.
- Hsieh, Chang-Tai; Hurst, Eric; Jones, Charles; Klenow, Peter.** 2019. The Allocation of Talent and U. S. Economic Growth, *Econometrica* 87:5, 1439-1474. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA11427>.
- Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE** (2020). Proyecciones de población de ambos sexos, según edad, 2012-2022. Disponible en: <https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-y-proyecciones-de-poblacion-sociales/>.
- Isaksson, A.** (2007). Determinants of Total Factor Productivity: a literature review. Research and Statistics Branch, UNIDO, 1, 101.
- Islam, Roumeen.** (2003). Do More Transparent Governments Govern Better? Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=636439.
- Johnson, D.** (2001). What is innovation and entrepreneurship? Lessons for larger organisations. *Industrial and Commercial Training*, 33(4), 135-140.
- Kim, Y. E.; Loayza, N.** (2019). Productivity Growth: Patterns and Determinants across the World. World Bank Policy Research Working Paper, (8852).
- Juvenal, L.; Santos Monteiro, P.** (2013). Export market diversification and productivity improvements: theory and evidence from Argentinean firms. FRB of St. Louis Working Paper No. 2013-015A.
- Koyuncu, J. Y.; Yilmaz, R.; Ünver, M.** (2016). The relationship between female labor force participation and labor productivity: Panel data analysis. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 11(2), 237-249.
- La Empresa** (marzo 2019). Situación del desempleo y subempleo en Bolivia. Disponible en: <http://www.libreempresa.com.bo/coyuntura/20190326/situacion-del-desempleo-y-subempleo-en-bolivia>.
- La Porta, R.; Shleifer, A.** (2014). Informality and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 28 (3), 109-26. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.3.109>.
- Lambsdorff, J. G.** (2003). How corruption affects productivity. *Kyklos*, 56(4), 457-474.
- Lanyi, A.** (1983). The importance of interest rates in developing economies. *Finance & Development*, 21.
- Lawry, S.; Samii, C.; Hall, R.; Leopold, A.; Hornby, D.; Mtero, F.** (2014). The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 10(1), 1-104.
- Loayza, N.** (2018). Informality: Why is it so Widespread and How can it be Reduced? *World Bank Research and Policy Briefs*, (133110). Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360124.
- Loayza, N. V.** (Ed.). (2010). Business regulation and economic performance. World Bank Publications.

- Manyika, J.; Roxburgh, C.** (2011). The great transformer: The impact of the Internet on economic growth and prosperity. *McKinsey Global Institute*, 1(0360-8581).
- Mapeo TIC Bolivia.** Ecosistema de Tecnología Digital. Varios autores institucionales. Accedido de <https://mapeoticbolivia.org/mapeo-2021>.
- Masello, D.** (2021). Problemas actuales de la economía informal. Desventajas de una definición generalista del empleo informal para sociedades desequilibradas. *Inter disciplina*, 9(23), 15-34.
- McKinsey.** (2015). McKinsey & Company. Global growth: Can Productivity Save the Day in an Aging World? Disponible en: https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/employment%20and%20growth/can%20long%20term%20global%20growth%20be%20saved/mgi%20global%20growth_executive%20summary_january%202015.pdf.
- Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia** (2022). Comunicado: El Ministerio informa que la deuda pública se encuentra en niveles sostenibles. Disponible en: <https://repositorio.economiayfinanzas.gob.bo/documentos/Banners/22-11-01-deuda-publica-bo.pdf>.
- Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia** (2014). Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025. Disponible en: <https://observatoriocdbolivia.files.wordpress.com/2015/08/peebol2025.pdf>.
- Monacelli, T.; Sala, L.; Siena, D.** (2023). Real interest rates and productivity in small open economies. *Journal of International Economics*, 142, 103746.
- Mora Barrenechea, M.** (2013). Un indicador de tendencia inflacionaria alternativo para la economía boliviana: la inflación latente. Banco Central de Bolivia, Documento de trabajo No. 02/2013. Disponible en: <https://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/2017/10/39/7-%20Inflaci%C3%B3n%20latente%20para%20Bolivia.pdf>.
- Moss, E.; Nunn, R.; Shambaugh, J.** (2020). The Slowdown in Productivity Growth and Policies That Can Restore It. The Hamilton Project–Brookings Institution. Disponible en: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/06/Productivity_Framing_LO_6.16_FINAL.pdf.
- Naciones Unidas** (2007, Febrero 7- 16). *Youth Employment: Impact, Challenges and Opportunities for Social Development*. Promoting Full Employment and Decent Work for All, New York, USA. Disponible en: <https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/csocd45emergingissues.pdf>.
- Naciones Unidas** (2021). Technology and Innovation Report 2021: Catching Technological Waves. Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf.
- National Research Council** (1986). Electricity in economic growth. National Academies Press.
- Nwandu, E.** (2016). Impact of rising interest rate on the performances of the Nigerian manufacturing sector. *European Journal of Business and Management*, 8(10), 125-134.
- Ocampo, J. A.** (2005). A Broad View of Macroeconomic Stability. DESA Working Paper No. 1. United Nations.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE** (2022a). Identifying the Main Drivers of Productivity Growth. A Literature Review. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/identifying-the-main-drivers-of-productivity-growth_0e2f7a46-en.
- OCDE** (2022b). Employment Outlook 2022. Tacking the cost-of-living crisis. Why bold government action is needed in labour markets. Disponible en: <https://www.oecd.org/employment-outlook/2022/>.

- OCDE. Andrews, D.; Criscuolo, C.; Gal, P.** (2016). The Best versus the Rest: The Global Productivity Slowdown, Divergence across Firms and the Role of Public Policy. Working Paper No. 05.
- OCDE** (2015). The Innovation Imperative. Contributing to Productivity, Growth, and Well-Being. Disponible en: <https://www.OECD.org/innovation/the-innovation-imperative-9789264239814-en.htm>.
- OCDE** (2014). The rationale for fighting corruption. Disponible en: <https://maritimecyprus.com/wp-content/uploads/2017/09/oecd-1.pdf>.
- OCDE. Noteboom, B.** (2013). Making labour markets inclusive. Disponible en: <https://www.oecd.org/employment/making-labour-markets-inclusive.htm#:~:text=An%20inclusive%20labour%20market%20is,in%20many%20sectors%20and%20economies>.
- Organización Internacional del Trabajo-OIT. Ernst, E.; Merola, R.; Reljic, J.** (2022a). Labour market policies for inclusiveness: A literature review with a gap analysis.
- OIT** (2022b). Global employment trends for youth 2022: investing in transforming futures for young people. International Labour Office. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/dgreports/-/dcomm/-/publ/documents/publication/wcms_853321.pdf.
- OIT** (2022f). Informe Regional: Productividad, transición digital, cambio tecnológico y políticas de desarrollo productivo en ALC: desafíos y oportunidades. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/americas/-/ro-lima/documents/publication/wcms_847153.pdf.
- OIT** (2022c). Informe Regional 2022. ¿Dónde están las organizaciones empresariales en el viaje hacia la digitalización? Una mirada a América Latina. Lima: OIT, Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP).
- OIT** (2022d). Care at work. Investing in care leave and services for a more gender equal world of work. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/dgreports/-/dcomm/documents/publication/wcms_838653.pdf.
- OIT** (2022e). Informe Regional. Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo. Informe regional complementario para América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_860719/lang-es/index.htm.
- OIT** (2021). Balance de los beneficios de la digitalización: Una guía para las organizaciones de empleadores y miembros de empresas (OE). Disponible en: <https://www.itcilo.org/es/resources/balance-de-los-beneficios-de-la-digitalizacion>.
- OIT** (2020). Impulsando la productividad. Una guía para organizaciones empresariales. ACT/EMP. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/ed_dialogue/-/act_emp/documents/publication/wcms_759690.pdf.
- OIT** (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture. Third edition. Disponible en: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang-en/index.htm.
- OIT** (2015). Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204.
- OIT** (2013). Informal enterprises: policy supports for encouraging formalization and upgrading. International Labour Organization. Geneva, Switzerland. Disponible en: https://www.ilo.org/empolicy/pubs/WCMS_210463/lang-en/index.htm.

- Orías Arredondo, R.** (agosto 2022). Meritocracia judicial o mediocridad de carrera. *Guardiana*. Disponible en: <https://guardiana.com.bo/opinion/meritocracia-judicial-o-mediocridad-de-carrera/>.
- Penn World Table**, <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en>.
- Restrepo Botero, D. I.** (2016). Bolivia: from the Economic Crisis to the “Rebel Cycle”, 2000-2005. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 43(1), 295-322.
- Rose-Ackerman, S.; Palifka, B. J.** (2016). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.
- Roth, F.** (2022). The Rule of Law and Labor Productivity Growth by Businesses: Evidence for the EU, 1998–2005. In *Intangible Capital and Growth: Essays on Labor Productivity, Monetary Economics, and Political Economy*, Vol. 1 (pp. 43-72). Cham: Springer International Publishing.
- Schumpeter, J.; Backhaus, U.** (2003). The Theory of Economic Development (pp. 61-116). Springer US.
- Schurr, S. H.; Darmstadter, J.; Perry, H.; Ramsay, W.; Russell, M.** (1979). Energy in America’s Future. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Schwarzer, J.** (2017). The Effects of Exporting on Labor Productivity: Evidence from German Firms. *CEP Working Paper*, 2.
- Stein, R.** (2009). Rule of Law: What Does It Mean. *Minnesota Journal of International Law*, 18, 293.
- Su, Z.; Wang, C.; Peng, M. W.** (2022). Intellectual property rights protection and total factor productivity. *International Business Review*, 31(3), 101956.
- Taylor, S. P.** (2017). What is Innovation? A Study of the Definitions, Academic Models and Applicability of Innovation to an Example of Social Housing in England. *Open Journal of Social Sciences*, 5(11), 128-146.
- The Conference Board**, <https://www.conference-board.org/eu/>.
- The Economist** (June 2023). Why are Latin American workers so strikingly unproductive? Disponible en: <https://www.economist.com/the-americas/2023/06/08/why-are-latin-american-workers-so-strikingly-unproductive>.
- Ulysea, G.** (2020). Informality: Causes and Consequences for Development. *Annual Review of Economics*, 12, 525-546.
- Ulysea, G.** (2018). Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108 (8): 2015-47.
- Unesco** (2020). Global Investments in R&D, Fact Sheet No. 59. Disponible en: <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs59-global-investments-rd-2020-en.pdf>.
- Vargas Suárez, R.** (2009). La nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en la presidencia de Evo Morales Ayma. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, (49), 11-34.
- Wu, R.; Cheng, X.** (2016). Gender equality in the workplace: The effect of gender equality on productivity growth among the Chilean manufacturers. *The Journal of Developing Areas*, 257-274.
- Xuefeng, Q.; Yaşar, M.** (2016). Export Market Diversification and Firm Productivity: Evidence from a Large Developing Country. *World Development*, 82, 28-47.



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP

Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe

